

**Sistema Integrado Provincial de Desarrollo, Regulación y Control
de Servicios de Agua y Saneamiento**

PROYECTO DE LEY

VISTO:

La necesidad de contar con un instrumento que afiance los principios de la política sectorial relacionada al desarrollo, regulación y control de servicios de agua y saneamiento en todo el territorio de la Provincia del Chaco; y

CONSIDERANDO:

Que las políticas y estrategias, tanto del orden público como privado, suelen tener en común la unidad de acción, el quehacer planificado y la voluntad común orientada a concretar una visión compartida y por ende al cumplimiento de los objetivos y misiones para alcanzarla a lo largo del tiempo.

Que cuando desde el Estado, de conformidad con determinados valores se trazan lineamientos para la consecución de propósitos preestablecidos, se está haciendo o promoviendo una determinada política.

Que las acciones políticas necesarias a la apropiada y sostenible gestión de recursos de un territorio, además de un claro y territorialmente apropiado sistema de normas jurídicas y actos administrativos requieren del desarrollo, modernización y fortalecimiento de la capacidad de gestión de las instituciones que las apliquen llevándolas a la práctica, y que concreten con solvencia los fines para los cuales se establecen.

Que para ello, el desarrollo de *marcos normativos* apropiados y realistas, de *organizaciones* que aseguren capacidad de gestión y administración eficaz, así como también de distintas estrategias focalizadas de *planificación participativa*, constituyen una trilogía esencial para el éxito de largo plazo de las políticas públicas estratégicas.

Que al respecto desde el Estado se desarrollan políticas sectoriales que atienden los diversos y complejos aspectos de la realidad de un Municipio, de una Provincia, una Nación o sus regiones.

Que una política sectorial es un conjunto de principios y reglas básicas, principios de organización y procedimientos fundamentales establecidos por el Gobierno -de acuerdo con la propia realidad geográfica, social y económico-financiera- con el propósito de optimizar la aplicación y controlar el buen uso y aprovechamiento de sus recursos, con la finalidad de contribuir al desarrollo integral de un cierto territorio o un determinado sector o jurisdicción.

Que en este punto el rol de la política es fijar objetivos generales, materializables a través de sucesivas metas específicas; estableciéndose para ello prioridades, plazos y pautas de ordenamiento jurídico-legal, institucional,

económico-financiero y administrativo, necesarias para alcanzar aquellos fines; siempre acorde a la propia realidad geográfica, social y económico-financiera.

Que si bien ello debe configurar un contexto donde primen la coherencia y las ideas de compacidad y completitud, en realidad toda política debe ser lo suficientemente dinámica y flexible, de modo que permita su reformulación cuando el conjunto de necesidades o condiciones objetivas se modifique.

Que asimismo ninguna política es necesariamente buena, adecuada o correcta por ser expresada en abstracto u obedecer acríticamente a reglas universales, o seguir a pies juntillas las emergentes de otros contextos, en tanto no refiera y ni responda a realidades territoriales concretas, propias, específicas.

Que por lo tanto sus estrategias y tácticas deben adaptarse a las potencialidades y condiciones de borde institucionales, materiales, a la idiosincrasia, cultura y tradiciones de los pueblos, así como también al ambiente físico del territorio donde se implementa; conjugando circunstancias socioeconómicas y ambientales.

Que consecuentemente la elaboración e instrumentación de aquellos principios y reglas que en parte definen una política sectorial, por cierto necesariamente deben considerar sus condiciones de borde (condicionamientos que imponen las leyes físico-naturales, las condiciones socioeconómicas y ambientales del medio, etc.); y deben reflejar la cuestión que vertebran y articulan; esto es: *los propios principios de política no deberían entenderse ni ser aplicados compulsiva ni aisladamente sino fundados e intrínsecamente articulados.*

Que sólo así las denominadas “políticas sectoriales” que en consecuencia se formulen, implementen, monitoreen y/o reformulen, podrán recién responder a la realidad y operar en ella constructiva e integralmente, pudiendo así sostenerse en el tiempo trascendiendo distintos horizontes temporales.

Que no debiéramos soslayar el hecho de que siempre existieron y existen aspectos que a la postre resultan centrales a una política sectorial estratégica, como lo es precisamente, la sanitaria, y de modo especial en atención a una política sectorial clave de la misma, cual es la del universo del agua y saneamiento: su desarrollo, regulación y controles como servicio público que es.

Que sobre el particular, la doctrina española señala como notas fundamentales del régimen jurídico del servicio público: titularidad pública sobre la actividad; responsabilidad de la administración sobre el servicio; exclusividad regalística; exigencia de previa concesión o título habilitante para entrar y permanecer en el sector; temporalidad de la concesión o título habilitante; la cuestión del monopolio o exclusividad; obligación de suministro; poderes internos de dirección, vigilancia y control del servicio a favor de la administración; continuidad y regularidad en la prestación; régimen de tarifas o precios públicos; transferencia de la concesión o de sus instalaciones necesaria autorización; etc. (Ariño, Gaspar. “Economía y Estado. Crisis y reforma del sector público”, págs. 317/348. Ed Marcial Pons, Madrid, España. 1993).

Que en orden a ello es deber del Gobierno Provincial definir las políticas sanitarias en su jurisdicción, a través de directrices oficiales que ordenen prioridades y parámetros de actuación en el plano de su desarrollo, calidad, regulación y control, como respuesta a diversos aspectos, tales como la situación sanitaria territorial y necesidades de salud, los recursos disponibles y otras necesidades propias de cada jurisdicción.

Que desde esta perspectiva, todos los elementos ambientales y sociales están fuertemente interrelacionados y condicionados entre sí y, por tanto, estudiarlos y resolverlos requiere enfoques, políticas y programas multisectoriales y multidisciplinarios y de acciones integradas transversales.

Que para reflejar ello en una norma o reglamentación se requiere la consideración de una multiplicidad de criterios y condiciones en torno a la factibilidad de eficacia de la regla misma.

Que en consecuencia es fundamental para la provincia toda la existencia y sostenimiento de una política sanitaria que armonice el desarrollo de servicios y programas de agua y saneamiento con el de un esquema provincial integral de regulación y control específicos, acorde a las distintas necesidades y particularidades del territorio provincial; como es el caso del presente proyecto, con el que se persigue dotar para las generaciones contemporáneas y legar hacia las futuras un marco normativo dinámico que constituya un sistema integrado y dinámico de promoción, regulación y control de los servicios públicos de agua y saneamiento en el territorio de la provincia del Chaco.

Que con dicho marco se fortalecen capacidades institucionales en orden al desarrollo de los servicios sanitarios y a la organización, articulación interinstitucional y establecimiento de reglas generales para las prestaciones, regulación y vigilancia de los mismos, cualquiera fuere la personería jurídica de la prestataria de los mismos y el medio, modalidad y magnitud del servicio de agua y saneamiento; cuya significación, tipología, alcances, actores intervinientes, obligaciones y derechos, los atributos de calidad, y regímenes prestacionales, económico, contravencional y de diferendos va interrelacionando el proyecto en su articulado y anexos, que constituyen el todo integrado de la Ley cuya sanción se promueve.

Que en materia de calidad exigible para el agua, el proyecto parte del reconocimiento como propio que la Provincia del Chaco ha hecho respecto de la Ley Nacional N° 18.284 aprobatoria del Código Alimentario Argentino-CAA, en su adhesión mediante Ley provincial N° 3.214.

Que dicho Código propicia pautas referenciales de calidad del agua en tanto alimento al mismo tiempo que reconoce que la autoridad provincial puede adoptar valores distintos toda vez que la naturaleza del suelo y agua de la región y restricciones materiales lo ameriten.

Que es inteligente este planteo toda vez que las recomendaciones periódicas que la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace en las conocidas como "Guías para la calidad de agua potable" tienen su alcance, precisamente en su misma denominación: son orientaciones o recomendaciones científicas

conducentes al paulatino desarrollo de prácticas en beneficio de la salud; proporcionan valoraciones no imperativas que -en ejercicio de la jurisdiccionalidad soberana de los Estados- las autoridades correspondientes pueden utilizar como referencia para sus reglamentos y normas, en el marco de planes de agua y saneamiento adecuados a la situación de los contextos regionales o territoriales.

Que importa esta consideración, y así lo asume el CAA cuando inteligentemente estipula que la autoridad competente “podrá admitir valores distintos si la composición normal del agua de la zona y la imposibilidad de aplicar tecnologías de corrección lo hicieren necesario” (CAA, Capítulo XII, Arts. 982 y 983 in fine): la elaboración e instrumentación de normas de calidad y control del agua claramente debe reconocer condiciones y horizontes -entre lo tolerable o aceptable y lo aconsejable o ideal- propios de las características naturales de la región, la realidad sanitaria territorial y su dinámica temporal impuesta por otras realidades de fondo, preexistentes o emergentes; entre ellas el crecimiento poblacional y su continua y creciente necesidad de cobertura de agua y saneamiento, la situación socio-económica y sanitaria de la población, sus capacidades financieras y las de los servicios, entre otras.

Que en el mismo sentido se expresa incluso el Gobierno Nacional en documentos, que informan al criterio de que la definición del límite aceptable de los parámetros de calidad del agua de bebida debe reconocer *“diferentes factores que dependen del contexto nacional, regional y local. El límite máximo a cumplir resultará de armonizar condiciones adecuadas en dichos ámbitos, adaptándolo a las circunstancias ambientales, sociales, económicas y culturales existentes, así como el establecimiento de prioridades”* (Comunicaciones oficiales de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación al Consejo Hídrico Federal-COHIFE: NO-2019-52957780-APN-DNAPS#MI y NO-2019-52991758-APN-SIPH#MI).-

Que resulta entonces propicio y oportuno que el presente proyecto de Ley estableciendo un Sistema Integrado Provincial de Desarrollo, Regulación y Control de Servicios de Agua y Saneamiento incluya el anexo elaborado para reglar la calidad y pautas de control del agua para consumo humano, materializando en sus disposiciones las necesarias actualizaciones y adecuaciones territoriales dinámicas de las recomendaciones y pautas de la OMS y del CAA; a la vez que amplía el espectro de parámetros a reglar y controlar, a partir de los acelerados avances en la aplicación y en el conocimiento de sustancias orgánicas e inorgánicas y agentes microbiológicos que pueden impactar en nuestras aguas, y por ende en la mayor complejidad y costos de su tratamiento.

Que por esta vía las normas provinciales de calidad y control del agua para consumo humano incluidas en el proyecto de Ley cuya aprobación se promueve son concordantes con el Código Alimentario Argentino; del que sin embargo y fundamentalmente, constituyen en la Provincia una instancia superadora en orden a: contenido de más parámetros, gradualidad de aplicación

y aplicabilidad misma en el territorio provincial, recogién dose además a preocupación sanitaria asociada al uso intenso de productos fitodomisaniarios en proximidades de cuerpos de agua utilizados como fuentes para el abastecimiento de agua, e incorporando parámetros no contemplados por la reglamentación sectorial vigente.

Que es oportuno en el presente acto creador de un Sistema Integrado Provincial como el que se propicia, el abordaje de la regulación y pautas de control referenciales respecto de la calidad admisible de efluentes cloacales, conforme prevé el proyecto en anexo pertinente.

Que por lo expuesto emerge como necesaria y oportuna la sanción del instrumento legal propuesto, que consagra actualizados y modernos principios de desarrollo, regulatorios y de contralor de los servicios públicos de agua y saneamiento en la provincia del Chaco.

Que en ello el legislador define la materia que regula, le estructura y sistematiza en un régimen normativo en sí mismo de fondo, completo, acabado; y cuya aplicación concreta relativa a materias parciales, operativas, reglamentarias en modos, tiempos y otras circunstancias recae en la autoridad de aplicación. La misma actúa según el estándar inteligible (Bianchi Alberto B "La delegación legislativa. Teoría de los reglamentos delegados en la Administración Pública", págs. 77/80. Ed Ábaco, Buenos Aires, Argentina. 1990), que el legislador establece en este mismo proyecto de Ley; es decir, la clara política legislativa, la lógica explícita o implícita, pero siempre discernible, que guía y actúa como mandato imperativo para el órgano delegado.

Que, por otra parte, esta estrategia es la vía de acción razonable por la cual realmente se posibilite en el territorio provincial la aplicabilidad de reglas y pautas de desarrollo, regulación y control, conforme a condiciones objetivas que responden a situaciones sanitarias propias de la Provincia del Chaco.

Que es reconocible la complejidad de la materia encarada y la necesidad de explicitar de forma preclusiva y clara ante la sociedad un marco normativo provincial que atienda al desarrollo, regulación y control de los servicios públicos de agua y saneamiento, en un cuerpo integrado para propender a un salto de calidad institucional en el sector sanitario, que a su vez responda con realismo a las expectativas de la sociedad en la materia.

Que las estrategias integradas e integrales de desarrollo sanitario involucran, en el plano de agua y saneamiento, el establecimiento e implementación sostenida de un complejo conjunto de acciones y medidas regulatorias y de control: en los cuerpos de captación de agua, en la colección y de disposición final de efluentes, en los procesos de tratamiento en ambos casos, en los sistemas de conducción y/o de distribución; e incluso en lo concerniente al régimen económico de los servicios como parte del ordenamiento normativo provincial.

Que al respecto, los sistemas tarifarios de los servicios públicos de agua y saneamiento constituyen la pauta, reglas y escalas de las que se derivan derechos y obligaciones de los sujetos físicos y jurídicos: constituyen derecho

objetivo, son normas que tienen sentido en tanto y en cuanto se integran como un elemento cambiante, y actualizable, en el conjunto del ordenamiento regulador; y en los que por ende debe tener injerencia y ejercer potestades en sus procesos de evaluación, aprobación y actualizaciones la autoridad de aplicación de la Ley que se promueve como norma fundamental del sector sanitario en la provincia del Chaco.

Que el texto que conforman el articulado y sus anexos incorpora las ventajas del tribunal administrativo, e importa en parte una convergencia entre el clásico modelo francés, inspirador de la entidad autárquica y el posterior modelo estadounidense de las agencias independientes.

Que conforme otras experiencias la opción por los tribunales administrativos constituye una importante alternativa estructural para posibilitar soluciones reales y más cercanas en el tiempo al creciente grado y complejidad de conflictos sociales que, naturalmente, no pueden ser respondidos por la administración pública tradicional ni por la actividad jurisdiccional judicial, cuyas estructuras y procedimientos no están pensadas para tan altos y complejos índices de conflictividades en la sociedad contemporánea.

Que la aprobación de esta modalidad del derecho público, que tiene las consiguientes limitaciones de jerarquía constitucional, dará lugar a modos concretos de responder pragmáticamente a premiosos reclamos de los hechos que componen nuestra realidad, de creciente vastedad y complejidad en los tiempos modernos.

Que precisamente la unión de la “potestad de ejecutar la Ley con la de resolver las controversias que su ejecución suscita” (Gustavino Elías P. “Tratado de la “jurisdicción” administrativa y su revisión judicial” T I, N° 145, Págs 161/62. Ed. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires; Bs. As, Argentina. 1987), y la versatilidad instrumental -programas concretos mediante- posibilitan ambas la concreta aplicación dinámica de las normas, proyectos y acciones en consideración, dentro de criterios, pautas y rangos explicitados en los capítulos pertinentes.

Que no es ello una cuestión menor, toda vez que el proyecto tiene en cuenta que los derechos de cuarta generación tienden a posibilitar el acceso universal a formas más avanzadas, abarcativas. concretas, flexibles y dinámicas de ciudadanía y civilidad, de libertad y de calidad de vida.

Que al respecto señala Marienoff, citando a otros autores, que “la doctrina, en general, reconoce los siguientes “caracteres” de servicio público: continuidad, regularidad, uniformidad y generalidad” (Marienoff. Miguel S. “Tratado de Derecho Administrativo”, T II, N° 311/12 y 314 a 318, Págs 62/68. 3ra Ed, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina. 1988)

Que el mancomunado trabajo interinstitucional e interdisciplinario para desarrollar el presente ha permitido consensuar que los marcos normativo e institucional y las herramientas de gestión son distintas dimensiones interrelacionadas para la adecuada gestión del agua y saneamiento.

Que de ellas la “dimensión normativa” reconoce la conveniencia de reunir sus vinculaciones mutuas en un sistema que integre la regulación y control de los servicios conforme se propone, la calidad del agua para consumo humano y la de los efluentes generados por la sociedad; sin desmedro de normas y actos administrativos concordantes emanados de autoridades provinciales, en conjunto con normas municipales que en consecuencia se dicten.

Que en virtud de reconocer que de hecho ninguna persona física o jurídica de derecho privado o público es por sí *depositaria de la sabiduría última* ni goza del *monopolio de la especialización valorativa*, la “dimensión institucional” del presente proyecto de Ley refiere a la integración e interacción entre la autoridad de aplicación, un comité técnico de revisión y actualización, específicas entidades vinculadas que el proyecto identifica, e incluso un consejo de usuarios en el marco de la Ley n° 24.240, art 55, y su modificatoria Ley n° 26.361.

Que el fortalecimiento de capacidades institucionales que se persigue, se verá en todo caso beneficiado de la mayor especialización, proactividad y capacidad de gestión posibles de sus agentes; autonomía institucional-funcional; e independencia del órgano respecto de las prestatarias.

Que de este modo, precisamente, estamos dejando atrás antiguos, contraproducentes y perimidos conceptos según las cuales la autoridad aplicación del servicio era o podía ser quien lo suministraba.

Que, por otra parte, la dimensión reconocida como “herramientas de gestión” remite a los planes, programas y proyectos generales y específicos propios del todo y cada parte del Sistema Provincial Integrado que se promueve.

Que el proyecto de Ley prevé que las atribuciones y funciones de su autoridad de aplicación se ejerzan sobre cimientos de cooperación en la relación recíproca entre el destinatario del servicio (usuarios) el regulado controlado (prestatarias) y el que regula y controla, es decir la autoridad de aplicación; la que articulará su accionar con el normal funcionamiento de los distintos tipos y diversidad de prestadores de modo tal que, en lo pertinente, no se obstruya indebidamente la gestión de los prestadores ni su elección de los medios que consideren más adecuados para cumplir con sus obligaciones de conformidad a la Ley, normas concordantes y actos que en su consecuencia se establezcan.

Que en definitiva el proyecto corporiza y evidencia la interrelación de las dimensiones clave enunciadas supra, para el desarrollo y adecuada gestión de los servicios de agua y saneamiento, su regulación y controles en la Provincia: marco normativo, contexto institucional y herramientas de gestión.

Que la profundidad, alcances y complejidades de todas estas materias y la escala de trabajo para el desarrollo del proyecto requirió desde el inicio un abordaje multidisciplinario y sistémico que excede al marco de una autoridad hídrica o sanitaria en particular, involucrando un fluido mecanismo de coordinación entre distintos organismos del Estado Provincial y, en partes, del sector del conocimiento universitario.

Que el proceso ha partido de la recopilación, revisión y verificaciones de normativas, decretos, manuales, instructivos, reglamentos y otros antecedentes

provinciales, nacionales e internacionales relacionados al tema; de los que se han adaptado algunas pautas y recomendaciones normativas, técnicas y procedimentales pertinentes; así como también se actualizaron criterios y ajustaron parámetros y controles aplicables al territorio provincial.

Que el proyecto resulta de un pormenorizado trabajo interinstitucional e interdisciplinario; habiéndose contado para ello con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones, y múltiples con profesionales y funcionarios vinculados al Consejo Hídrico Federal, la Asociación Federal de Entes de Regulación de Agua y Saneamiento y del Consejo Federal de Entidades Sanitarias..

Que a estos mismos efectos la estrategia de intervención se ha munido de distintas y valiosas discusiones orientadas según el objeto con agentes del ámbito público provincial (Administración Provincial del Agua, Dirección de Bromatología Provincial, Subsecretaría de Ambiente, Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial entre ellos), al igual que revisiones y aportes sustanciales de los mismos y de otros profesionales y técnicos de la actividad privada con experiencia en la materia.

Que asimismo componentes del presente proyecto se han visto fundamentalmente beneficiados a partir del trabajo conjunto en alianza con el sector del conocimiento, materializado en la activa y desinteresada colaboración de profesionales del ámbito universitario local: Universidad Nacional del Nordeste, Universidad Nacional del Chaco Austral, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad de la Cuenca del Plata y Universidad Gastón Dachary.

Que por otra parte el presente proyecto brinda un marco institucional apropiado para las distintas prestatarias de servicios públicos de agua y saneamiento en el territorio provincial, en orden al ordenamiento de planes y metas de gestión por resultados, exigibles por organismos de financiamiento internacional para el desarrollo de proyectos y obras, cual es el caso del Banco Mundial, entre otros.

Que lo establecido en el presente instrumento legal deberá ser aplicado por toda persona física y/o jurídica del derecho público y privado, que tenga o adquiera responsabilidad de abastecer por cualquier medio servicios de agua y/o de saneamiento en el territorio provincial; sin perjuicio de lo cual el temperamento de la norma es válido en general tanto para los responsables de los servicios, como para quienes les regulan y controlan, e incluso, en lo inherente, para los usuarios y las autoridades responsables de facilitar los medios para su aplicación.

Que el proyecto que se propicia considera la materia específica en el marco de las características generales socio-económicas y sanitarias de la población, de las capacidades tecnológicas, legislativas y económico-financieras, las características de los servicios en general, y otras particularidades territoriales y jurisdiccionales propias de la provincia del Chaco.

Que corresponde a cada uno de los Poderes Públicos la interpretación de las cláusulas constitucionales que establecen sus propias atribuciones.

Que el Poder Legislativo del Gobierno de la Provincia del Chaco considera satisfactorios los principios que abonan los fundamentos y contenido del presente proyecto de Ley;

Que, por lo expuesto, se hace necesaria la sanción del presente instrumento legal;

**LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO
SANCIONA CON FUERZA DE**

LEY:

**TITULO I
PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES PRELIMINARES**

Artículo 1.- Objeto. La presente dispone el fortalecimiento *de* capacidades institucionales en orden al desarrollo de los servicios públicos de agua y saneamiento en la provincia del Chaco y a la organización, articulación interinstitucional y establecimiento de reglas generales para las prestaciones, regulación y vigilancia de los mismos, cualquiera fuere la personería jurídica de la prestataria de los mismos y el medio, modalidad y magnitud del suministro.

Artículo 2.- Finalidades. Esta Ley tiene las siguientes finalidades:

- a) Tutelar y proteger la salud pública en perspectiva de la interrelación entre la los servicios sanitarios, la salud de la población y el ambiente.
- b) Promover el desarrollo, preservación y adecuada utilización de las prestaciones públicas de agua y saneamiento en toda la provincia.
- c) Establecer un dispositivo legal situado que concilie el suministro eficaz de servicios por sus prestatarias con el adecuado ejercicio de obligaciones y derechos de los usuarios, en el marco de facultades estatales relativas a protección y bienestar de la población en materia de agua y saneamiento.

Artículo 3.- Objetivos. Constituyen objetivos de la Ley:

- a) Establecer normas que permitan alcanzar gradualmente niveles de calidad y efectividad de los servicios, conforme la naturaleza de las prestaciones en cada zona, distrito, localidad o paraje de prestación en los que haya o se desarrollen servicios o suministros públicos de agua y saneamiento.
- b) Generar un marco y ámbito institucional responsable de la regulación y control de condiciones de calidad, continuidad, regularidad y generalidad en la prestación de los servicios públicos de agua y saneamiento.

- c) Promover el adecuado funcionamiento, mantenimiento, mejoras, ampliaciones y desarrollo de distintos servicios de agua y saneamiento en la provincia, al mismo tiempo que el cuidado y uso apropiado de los mismos.
- d) Proteger los derechos de los usuarios y conciliarlos con sus obligaciones y con el accionar, derechos, obligaciones y atribuciones de la Autoridades de Aplicación y de las prestatarias.-

Artículo 4.- Ámbito de aplicación. La presente Ley alcanza a toda prestación o suministro de servicios públicos de agua y saneamiento, cualquiera fuere la entidad o personería jurídica de la prestataria y el medio, modalidad y magnitud del servicio; en todo el ámbito geográfico de la provincia del Chaco.

La Ley y las normas y actos que en su consecuencia se establezcan o se convengan, son aplicables a la promoción, explotación y prestación de servicios públicos de captación, potabilización, almacenamiento, transporte y distribución de agua; cualquiera fuese la fuente de toma, captación o carga, y las modalidades de conducción, tratamiento y distribución: red domiciliaria, grifos públicos, cisternas, agua disponible para retiro, conforme se define en el Anexo A (Significado de Conceptos Aplicables), u otras modalidades que constituyan servicio público de agua segura.

Asimismo son de aplicación a sistemas de recolección, tratamiento, conducción, disposición final y reuso de efluentes cloacales y sólidos resultantes; incluyéndose aquellos de origen comercial, industrial, agropecuario, hospitalario u otro, siempre que el régimen legal en vigencia permita que se viertan -en las condiciones que dicho régimen establezca para cada tipo de efluente- al sistema de recolección, a la planta de tratamiento o dispositivo final de éste.-

Artículo 5.- Titularidad. En la provincia del Chaco el titular de los servicios públicos de agua y saneamiento es el Estado Provincial.-

TITULO II

SISTEMA INTEGRADO PROVINCIAL de DESARROLLO, REGULACIÓN y CONTROL de SERVICIOS de AGUA y SANEAMIENTO

CAPÍTULO 1: MARCO INSTITUCIONAL

Artículo 6.- Integración. Establécese el Sistema Integrado Provincial de Desarrollo, Regulación y Control de Servicios de Agua y Saneamiento. Constituyen dicho sistema:

- a) La presente Ley, las normas y actos que en su consecuencia se establezcan o se convengan, las normas provinciales de calidad del agua para consumo humano y las normas provinciales de efluentes cloacales, y demás Normas Aplicables conforme se define en Anexo A;

b) La Autoridad de Aplicación;

c) Entidades vinculadas:

1. *Ministerio de **Desarrollo Urbano y Planificación Territorial***, u organismo que en el futuro le sustituya, en orden a la importancia que para la expansión de cobertura de los servicios sanitarios tiene el ordenamiento y planificación del territorio urbano, periurbano y rural.
2. *Ministerio de **Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología***, u organismo que en el futuro le sustituya, en orden a sus potencialidades educativas, formativas-informativas de usuarios, prestadores y fiscalizadores.
3. *Ministerio de **Infraestructura y Servicios Públicos***, u organismo que en el futuro le sustituya, que aportará al sistema sus perspectivas en materia de políticas, planes, programas y proyectos provinciales, licitaciones y ejecución de obras de infraestructura y servicios públicos.
4. *Ministerio de **Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica***, u organismo que en el futuro le sustituya, en perspectiva de su potencialidad de contribuciones en materia de efluentes y su relación con la salud ambiental, en particular respecto del sistema agua-ambiente.
5. *Ministerio de **Salud Pública***, u organismo que en el futuro le sustituya, en orden al vínculo de la salud humana con el desarrollo y apropiado funcionamiento de los servicios sanitarios.
6. ***Administración Provincial del Agua***, u organismo que en el futuro le sustituya, como autoridad hídrica provincial en su carácter de autoridad de aplicación el Código de Aguas de la Provincia del Chaco.
7. ***Laboratorio Provincial de Referencia del Sistema***. *El Laboratorio de la Administración Provincial del Agua* será el laboratorio de referencia del Sistema en general y de la Autoridad de Aplicación en particular.
8. ***Municipalidades***, conforme reglamente la Autoridad de Aplicación.
9. ***Prestadores de servicios públicos de agua y saneamiento*** en tanto sujetos relevantes del sistema, con derechos y obligaciones sean personas físicas o jurídicas de derecho público o privado.
10. ***Usuarios***, en tanto razón de la necesidad de desarrollo, regulación y control de los servicios sanitarios, y a quienes la Ley reconoce derechos y obligaciones.
11. ***Entidades académicas***. Las universidades públicas y privadas con sede académica en El Chaco son invitadas a colaborar en la implementación de esta Ley y las normas y actos que en su consecuencia se establezcan o se convengan, como importantes núcleos de apoyo y aportes técnico-científicos desde el sector del conocimiento a la gestión del Sistema Integrado Provincial de Desarrollo, Regulación y Control de Servicios de Agua y Saneamiento.

Artículo 7.- Competencia originaria. Compete al Gobierno de la Provincia todo lo relativo a los servicios públicos de agua y saneamiento, su desarrollo, regulación y control en el territorio del Chaco.

CAPÍTULO 2: REQUERIMIENTOS de las PRESTACIONES de SERVICIOS

Artículo 8.- Requerimiento general. La prestación o suministro de servicios de agua y saneamiento deberá sujetarse a los requisitos y estipulaciones fijados en el articulado de esta Ley y en las restantes Normas Aplicables, en lo pertinente y concordante con el presente dispositivo jurídico.

Artículo 9.- Competencia para la prestación. En virtud de su competencia originaria, los servicios públicos de agua y saneamiento son prestados por el Gobierno Provincial, a través de su gestión directa mediante a) la concesionaria estatal del Sistema Provincial que define la Ley n° 2.499, Art 2, y b) entes autárquicos provinciales; o bien a través de concesiones o licencias conforme definiciones del Anexo A que, sin perjuicio de la inalterabilidad de la condición de servicios públicos, se otorguen en favor de Municipalidades, Cooperativas de servicios públicos, de organizaciones de usuarios, empresas privadas o de particulares; en todos los casos con capacidades jurídico-legales, económico-financieras y técnico-industriales exigidos, y requisitos complementarios que establezca la Autoridad de Aplicación en cumplimiento a la presente Ley.

Serán de adjudicación directa las concesiones o licencias, según corresponda, a Municipalidades, Cooperativas de servicios públicos u organizaciones de usuarios sin fines de lucro **que cumplan con tales capacidades y requisitos.**

La decisión de otorgar concesiones y licencias corresponde al Poder Ejecutivo Provincial; ejercitando la Autoridad de Aplicación las potestades operativas de autoridad concedente, con competencia para llevar a cabo las mismas, actuando conforme las autorizaciones requeridas por esta Ley y legislación aplicable en vigencia.

Artículo 10.- Subconcesión, subcontratación y Licencias. Cumpliendo con los requerimientos de circunstancias, condiciones técnicas y formalidades que estipule la Autoridad de Aplicación, y previa autorización de la misma y de la autoridad concedente, podrá subconcesionarse o subcontratarse hasta un veinticinco por ciento (25%) del servicio; sin que en ningún caso la entidad prestataria principal deje de ser responsable plena de la prestación a su cargo, ante los usuarios y la Provincia.

En el caso de las Municipalidades y Cooperativas de servicios públicos se requerirá además que la decisión de subconcesionar o subcontratar cuente con el voto favorable de las dos terceras partes (2/3) de los miembros del Consejo Deliberante o de los usuarios de la Cooperativa respectivamente.

Las licenciatarias no pueden sublicenciar ni subcontratar los servicios de agua y/o saneamiento bajo su responsabilidad.

Artículo 11.- Requisito originario imprescindible. La estricta observancia de los anteriores artículos del presente Capítulo constituye requisito básico imprescindible para la actuación de las personas físicas y jurídicas, de derecho público o privado, en la prestación de servicios públicos de agua y saneamiento. La Autoridad de Aplicación impedirá el accionar de personas físicas o jurídicas que suministraren servicios regulados por la presente Ley en incumplimiento de este dispositivo legal, con el auxilio de las fuerzas públicas si a su juicio fuere necesario.

Artículo 12.- Alcances de la prestación de servicios. Cada prestataria podrá brindar servicios de agua y/o saneamiento en distintas zonas, distritos, localidades y parajes de prestación en el territorio provincial. En ellos podrá haber áreas servidas -con usuarios actuales- y áreas de expansión- con usuarios potenciales-; las que deberán ser alcanzadas por el servicio sanitario público suministrado por la prestataria correspondiente y en las que la misma desarrollará los planes de mejoras, desarrollo y expansión que se aprobaren.

Artículo 13.- Obligatoriedad de conexión al servicio de agua. Una vez que el servicio de suministro de agua para consumo humano esté disponible y en condiciones de operatividad, y ello hubiere sido notificado a los propietarios, consorcios de propietarios, poseedores o tenedores, los inmuebles respectivos deberán ser conectados al servicio. Previo aviso a los usuarios, la prestataria deberá aislar toda otra fuente de provisión de agua al inmueble en una secuencia de trabajo tal que permita minimizar la interrupción del abastecimiento de agua al mismo.

Queda prohibido conectar al servicio público de agua para el consumo humano otras fuentes que no estén bajo supervisión de la prestataria.

Artículo 14.- Fuentes alternativas de agua. En caso de que el usuario quiera mantener una fuente alternativa de agua deberá solicitarlo por escrito a la prestataria; esta podrá permitir la utilización de la fuente siempre que el agua de la misma cumpla con normas de calidad apropiadas al uso, que el uso de la fuente haya sido autorizada por la Administración Provincial del Agua, a la que abonará el canon y tasas correspondientes, y que no existan riesgos para la protección de la fuente de agua o la prestación del servicio. Las denegatorias podrán ser recurridas formalmente por el usuario ante la Autoridad de Aplicación, en los términos reglados al efecto; la que previo controles y evaluaciones podrá o no modificar la decisión de la prestataria.

Toda autorización de uso de fuente alternativa de agua irá acompañada de expresas recomendaciones técnicas, emitidas por la prestataria, de potabilización, manipulación y manejo intradomiciliario del agua; y será además registrada por la prestataria y la Autoridad de Aplicación.

Artículo 15.- Obligatoriedad de conexión al servicio de saneamiento. Una vez que el servicio de saneamiento esté disponible y en condiciones de operatividad, con suficiente capacidad para transportar efluentes hasta el lugar de su tratamiento y posterior vertimiento al cuerpo receptor, y ello hubiere sido notificado a los propietarios, consorcios de propietarios, poseedores y/o tenedores, los inmuebles respectivos deberán ser conectados al servicio. Asimismo las perforaciones o pozos deberán ser anulados y los tanques sépticos y todo otro desagüe cloacal alternativo cegados por el usuario, en ambos casos según recomendaciones y acompañamiento técnico de la entidad prestataria.

Artículo 16.- Declaración de utilidad pública. Se declaran de utilidad pública sujetos a expropiación, ocupación temporánea o a la constitución de servidumbres administrativas y restricciones al dominio: las vertientes o manantiales, los surgentes, pozos y perforaciones de cualquier profundidad, y los inmuebles que resulten necesarios para la explotación del servicio de agua y/o saneamiento, o para la construcción, instalación y adecuación de obras y sistemas requeridos para su prestación.

La Autoridad de Aplicación en conjunto con la autoridad concedente y organismos pertinentes del Poder Ejecutivo individualizarán los inmuebles requeridos a los fines precedentes, con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación.

Artículo 17.- Remoción de instalaciones del suelo y subsuelo. A requerimiento de la prestataria, las empresas de servicios públicos y demás personas que hagan uso u ocupen el suelo o subsuelo, removerán sus instalaciones cuando sea técnicamente imprescindible para la construcción o explotación de las obras para la prestación del servicio sanitario.

Los gastos que esos trabajos demanden serán abonados por la prestataria, salvo que las empresas que ocupen o hagan uso del suelo se obliguen a soportarlos. La remoción de instalaciones del prestador será costeadada por quien lo solicite.

Artículo 18.- Obras por contribuciones directas o repago de créditos. Cuando deban efectuarse obras que beneficien a determinados usuarios o sectores del área servida, las mismas deberán cumplir también con los requisitos técnicos pertinentes y con la aprobación de la Autoridad de Aplicación; requiriéndose además adhesiones específicas.

Las inversiones requeridas para su realización podrán ser solventadas con aportes directos o repago de créditos por parte de los usuarios involucrados, en la forma y condiciones que determine la Autoridad de Aplicación. En ningún caso el Estado Provincial prestará garantías o avales en los contratos suscriptos voluntariamente entre la prestataria y tales usuarios, excepto cuando el primero sea algún ente autárquico, sociedad o empresa del Estado Provincial.

La prestataria liquidará en forma discriminada en la facturación los rubros correspondientes a aportes que se definan en función de este artículo o que tengan por objeto el pago de créditos que hubieran financiado la inversión. Los importes a cobrar por el servicio reconocerán el pago de la inversión realizada por los usuarios.

Artículo 19.- Bienes afectados al servicio. Se entenderá por bienes afectados a los servicios de agua y/o saneamiento todos los bienes muebles e inmuebles afectados directa o indirectamente, en forma total o parcial, para su utilización en cualquier etapa, proceso, actividad o tarea inherentes a la prestación del servicio sanitario a la fecha de sanción de la presente Ley, y los que a futuro se incorpore a tales fines; todos los cuales conforman una unidad de afectación.

Integran también la unidad de afectación los bienes e instalaciones correspondientes a obras existentes, en curso de ejecución y futuras; y los inmuebles por naturaleza o por accesión que la entidad prestataria haya adquirido, rentado o construido, y que a futuro adquiera, rente o construya con el objeto de cumplir sus obligaciones como prestatario del servicio.

La condición jurídica de los bienes afectados a la prestación de los servicios de agua y saneamiento será la que le corresponda a cada bien en virtud del ordenamiento legal en vigencia, sin perjuicio de su afectación a la prestación del servicio.

Artículo 20.- Responsabilidad inherente. La prestataria del servicio sanitario es responsable ante la Provincia y terceros por la correcta adquisición, renta, construcción, utilización, administración, operación, mantenimiento, renovación y disposición de los bienes afectados al servicio; así como por todas las obligaciones y riesgos inherentes a ello.

Correspondiendo a la prestataria la administración de los bienes afectados al servicio, los mismos serán inventariados *ad hoc*, e informado el inventario a la Autoridad de Aplicación; la que, en supuestos de disposición de bienes afectados por parte de la prestadora, deberá tener intervención previa.

Todos los bienes afectados se mantendrán en buen estado de conservación y uso, realizándose renovaciones periódicas, disposiciones y adquisiciones que correspondan según naturaleza y características de los mismos y necesidades del servicio; incorporando las innovaciones tecnológicas convenientes.

Artículo 21.- Restituciones. A la extinción de toda concesión, será sin cargo la transferencia a la Provincia de los bienes muebles e inmuebles afectados al servicio; sea que se hubieran transferido en relación a la concesión o que se tratare de bienes adquiridos o construídos durante su vigencia, incluyendo prórrogas de la misma. Quedan exceptuados de esta disposición los bienes que, conforme a derecho, hubieran sido enajenados y/o sustituídos por otros durante la vigencia de la concesión.

Artículo 22.- Evaluación de cumplimiento. La evaluación de cumplimiento de las obligaciones en general, impuestas y a imponer tanto a prestadores como a usuarios, así como también el reconocimiento de sus respectivos derechos, tendrá en especial consideración la tipificación, características y situación del servicio y de la infraestructura asociada al mismo.

La aplicación de requisitos de calidad del servicio conjugará las exigencias de normas específicas y las posibilidades del prestador de encararlos y de los usuarios de solventarlos. Siempre que se acredite la imposibilidad de cubrir sus costos a través de la tarifa, el Estado podrá valorar la factibilidad de intervenir para cubrir la diferencia u otra alternativa de sostenimiento del servicio sanitario.-

Artículo 23.- Radio de protección de fuentes. Con el objeto de proteger las fuentes de captación y tomas de agua para uso y consumo humano se observará que los feedlots u otros sistemas intensivos y concentrados de producción animal, los mataderos y frigoríficos, las fumigaciones u otras actividades y/o instalaciones potencialmente contaminantes, así como también la construcción de pozos y perforaciones cualquiera fuese la profundidad, sólo podrán desarrollarse a una distancia y ubicación -respecto de fuentes superficiales y subterráneas de provisión de agua para consumo humano- que determinará la Autoridad de Aplicación en cada caso, a requerimiento previo del correspondiente prestatario.

Previo a tal determinación de la distancia mínima y condiciones inherentes al caso la Autoridad de Aplicación solicitará se expidan técnicamente los organismos pertinentes del Poder Ejecutivo Provincial.

CAPÍTULO 3: De la CALIDAD del SERVICIO de AGUA y SANEAMIENTO

Artículo 24.- Atributos Indicativos de Calidad de Servicio. La entidad prestataria es responsable de satisfacer los Atributos Indicativos de Calidad de Servicio (AICS) definidos en el Anexo B; cuya progresividad de cumplimiento asumirá para zona, distrito, localidad o paraje de prestación, de conformidad al tipo y características de cada prestación, salvo estipulaciones específicas en el articulado de la presente Ley.-

Artículo 25.- Normas Provinciales de Calidad y Control del agua para Consumo Humano.

Toda persona física y/o jurídica del derecho público o privado que tenga o adquiera la responsabilidad ocasional, periódica o permanente de abastecer o suministrar agua para el consumo humano en el territorio provincial, sea cual fuere el medio utilizado, está obligada a observar y dar cumplimiento a las “Normas Provinciales de Calidad y Control del agua para Consumo Humano” establecidas en Anexo C de esta Ley.

Artículo 26.- Normas Provinciales de Calidad de Efluentes. Los efluentes cloacales se ajustarán a las “Normas Provinciales de Calidad de Efluentes Cloacales” aprobados en esta Ley como Anexo D de la misma, y a las normas, actualizaciones y requerimientos complementarios que apruebe la Autoridad de Aplicación; debiéndose adecuar los sistemas de tratamiento al conjunto de tales reglas y requisitorias, considerando las aplicables para la descarga de líquidos cloacales así como también de sólidos y aguas residuales producidos, y su disposición.

Artículo 27.- Del vertido de efluentes industriales, comerciales, y agropecuarios o similares. Los vertidos de este tipo de efluentes deberán ajustarse en general a las “Normas Provinciales de Calidad de Efluentes Cloacales” (Anexo D); y observarán en particular pautas complementarias de calidad, concentración de sustancias, caudales, volúmenes y continuidad o frecuencia, que en virtud del caso se exijan.

El prestador no recibirá efluentes que no se ajusten a las estipulaciones reguladas al efecto; estando incluso autorizado a cortar la conexión del servicio público de saneamiento o desagües en infracción en tales circunstancias. Deberá asimismo dar aviso y documentar la situación ante la Autoridad de Aplicación y las máximas autoridades provinciales de ambiente y de recursos hídricos. Alternativamente, puede el prestador dar tratamiento a los efluentes en cuestión para adecuarlos a las reglas de admisibilidad, quedando facultado para cobrar al emisor la totalidad de los servicios adicionales que al efecto deba prestar.

La Autoridad de Aplicación podrá establecer reglas específicas de estos vertidos sin vulnerar las prescripciones de la presente Ley.

Artículo 28.- Impedimentos hidráulicos. Sin perjuicio del artículo anterior, la prestataria podrá oponerse a la conexión de desagües a la red cloacal y/o a la planta de tratamiento, por razones atinentes a las capacidades de procesos, a la capacidad hidráulica de transporte, tratamiento y/o evacuación de las instalaciones existentes, y a la protección de los servicios e instalaciones en operación. En cualquiera de estas circunstancias, deberá dar aviso y documentar

la situación ante la Autoridad de Aplicación y las máximas autoridades provinciales de ambiente y de recursos hídricos

En caso de conflictos, controversias o diferendos será de aplicación lo dispuesto al respecto en la presente Ley.

CAPÍTULO 4: PRESTARIOS DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

Artículo 29.- Capacidades. Los prestadores deberán contar con suficiente capacidad técnica y financiera, y experiencia para suministrar el servicio agua y/o saneamiento, acorde a los tipos, ubicaciones, magnitudes y complejidades de las prestaciones o suministros de su responsabilidad; cumpliendo con los requisitos exigidos en la presente Ley, normas concordantes, actos administrativos y contractuales derivados, y estipulaciones pertinentes de las Normas Aplicables.

Artículo 30.- Individualidad operativa, administrativa y económico-financiera. Con excepción de las Municipalidades o Cooperativas que suministren más de un servicio público, los prestadores no podrán realizar ninguna otra actividad comercial o industrial que la provisión de uno o más servicios públicos de agua y/o saneamiento -definidos éstos a razón de uno por cada zona, distrito, localidad o paraje de prestación- y la realización de actividades estrictamente vinculadas a ello, salvo autorización expresa de la Autoridad de Aplicación.

Toda persona física o jurídica de derecho público o privado que suministre servicios de agua y saneamiento comprendidos en la presente normativa, deberá llevar administraciones, registraciones y fichas técnicas exclusivas e independientes para cada servicio público de agua y/o saneamiento de la que es prestataria, conforme reglamente la Autoridad de Aplicación a fin de posibilitar el adecuado control de la prestación sanitaria propiamente dicha.

Artículo 31.- Procedimientos de contratación con terceros. Los convenios, acuerdos o en general contratos celebrados por Municipalidades, Cooperativas, organizaciones de usuarios sin fines de lucro, empresas privadas o particulares -en tanto prestadores de servicios de agua y saneamiento deberán incluir una cláusula que estipule expresamente la potestad de la autoridad provincial concedente de disponer su continuación o no, en caso de extinción o reversión del instrumento o facultad que habilite al prestador para brindar el servicio; debiéndose dejar expresamente señalado en dicha cláusula que el ejercicio de tal potestad por la no continuidad en ningún caso generará ninguna obligación de ningún tipo para el Estado Provincial.

Esta disposición alcanza por igual a todas las prestatarias actuales y futuras, sean personas físicas o jurídicas de derecho público o privado.

Artículo 32.- Obligaciones de los prestadores. Sin perjuicio de otras emergentes del articulado de la presente Ley, constituyen obligaciones de las prestatarias:

- a)** Disponer los medios humanos, técnicos y materiales necesarios para operar y suministrar adecuadamente el/los servicio/s bajo su responsabilidad. Evaluar niveles de calidad y seguridad de los mismos, implementar las medidas necesarias para garantizarlas; y en general administrar, utilizar, operar, renovar y mantener en buenas condiciones de conservación y uso todos los bienes afectados al servicio, debiendo incorporar innovaciones tecnológicas que mejorar sus prestaciones.
- b)** Cumplir con los Atributos Indicativos de Calidad de Servicio (AICS), con las estipulaciones de las Normas Provinciales de Calidad y Control del Agua para Consumo Humano, con las Normas Provinciales de Calidad de Efluentes Cloacales y con las demás estipulaciones que esta Ley establece.
- c)** Elaborar los planes y proyectos de operación e inversiones, y los Planes de Mejoras, Desarrollo y Expansión de los servicios en las zonas, distritos, localidades o parajes de prestaciones a su cargo; y presentarlos a la Autoridad de Aplicación, con todos los documentos pertinentes en cada caso, para su aprobación previa a la gestión e instrumentación de los mismos.
- d)** Ejecutar por sí o por terceros todas las obras inherentes al mantenimiento, mejoras y expansión de los servicios pertinentes; debiendo además organizar y mantener en buen estado de conservación la documentación referente al proyecto y su construcción, así como también a la operación, mantenimiento, seguridad y cuanto corresponda de las obras de infraestructura e instalaciones, en tanto responsable de las mismas como prestatario del servicio sanitario a su cargo.
- e)** Mantener, renovar y extender las redes de distribución (incluyendo la realización de conexiones externas) y/u otros medios de suministro según corresponda. Asegurar la provisión de agua contra incendios
- f)** Mantener la oferta de todos los servicios a los niveles de tarifas autorizados. Pagar las tasas y tributos pertinentes en la forma y condiciones dispuestas por las normas, actos administrativos y convenios pertinentes.
- g)** Elaborar y mantener actualizada los registros y fichas técnicas de cada servicio a cargo de la prestataria; e informar los mismos a la Autoridad de Aplicación, suministrando a ésta todos los documentos respaldatorios.
- h)** Observar las reglamentaciones dictadas por la Autoridad de Aplicación, sin perjuicio de la observancia de las normas regulatorias de registros contables. A tales efectos, registrar la evolución de sus activos y pasivos e inversiones realizadas, con determinación precisa de sus costos de origen, la cuantía de las depreciaciones, la exacta conformación de sus costos y cuanto más datos e informaciones sean solicitadas por la Autoridad de Aplicación

- i)** Acreditar la disponibilidad de profesionales y/o técnicos con título habilitante, que conozca el servicio sanitario del que es prestador, la infraestructura en general e instalaciones en particular, y que pueda tomar decisiones o proponer medidas y/o acciones en caso de que cualquier condición del servicio se vea alterada o una situación de riesgo se encuentre en curso.
- j)** Elaborar un Plan de Acción de Emergencia Sanitaria (PADES) de cada prestación a su cargo, y revisarlo con la periodicidad que se acuerde con la Autoridad de Aplicación. El plan y sus revisiones deberán ser puestos a consideración de la Autoridad de Aplicación.
- k)** Proyectar e instrumentar las debidas acciones y medidas precautorias para evitar, en relación a sus actividades, tanto la contaminación ambiental como la sobreexplotación del recurso hídrico.
- l)** Efectuar las inspecciones periódicas, así como también las revisiones durante y posteriores a una situación contingente, de la infraestructura e instalaciones y del funcionamiento de la prestación a su cargo. Las inspecciones periódicas serán previstas en un cronograma puesto a consideración y aprobación de la Autoridad de Aplicación.
- m)** Proyectar e instrumentar las debidas acciones y medidas precautorias para evitar, en relación a sus actividades, tanto la contaminación ambiental como la sobreexplotación del recurso hídrico.
- n)** Informar a la Autoridad de Aplicación cualquier incidente y/o alteración de condiciones que pueda causar reducción del nivel de seguridad y calidad del servicio que presta; e implementar las pertinentes medidas preventivas y/o correctivas según corresponda. En casos de interrupción por razones fortuitas, de fuerza mayor u otras, rehabilitar los servicios inmediatamente después de cesada la causa y solucionados los problemas del servicio a su cargo.
- o)** Los proveedores de agua transportada mediante cisternas, tanques u otros medios, para el consumo humano (bebida y preparación de alimentos), tales medios -tanto públicos como privados- serán de uso exclusivo para este fin, previamente registrados y autorizados por la autoridad de aplicación; y deben asegurar y mantener las condiciones de sanidad y aislación atmosférica y de factores potencialmente contaminantes del tanque o cisterna u otro medio en el que se transporta, distribuye y suministra el agua;
- p)** Tales condiciones, y las del agua misma, tendrán doble control: de la prestataria que suministra el agua al transportista y de la Municipalidad en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio destino del agua. Dicha autoridad local verificará el cumplimiento de condiciones de sanidad y aislación atmosférica y de factores potencialmente contaminantes de los tanques o cisternas en los que se almacena el agua suministrada para consumo humano
- q)** Cuando se detecten circunstancias o hechos que, constituyan o no infracción, ocasionen o a priori puedan producir contaminación de los cursos

de agua o sus fuentes naturales de agua, o que perjudiquen o puedan perjudicar el servicio, los prestadores deberán intimar el cese de la infracción fijando un plazo al efecto; comunicar dicha circunstancia de inmediato a la Administración Provincial del Agua y a la autoridad provincial del ambiente; y dar cuenta de todo ello a la Autoridad de Aplicación. En caso de negativa del ocasionante, o de incumplimiento del plazo que le fuera establecido, podrá la entidad prestataria requerir la intervención de estos organismos a efectos de que se disponga el cese de la circunstancia o hecho denunciado. El procedimiento circunstanciado en este inciso no invalida ni excluye la aplicación de las sanciones y resarcimientos que correspondan.

- r)** Presentar anualmente a la Autoridad de Aplicación un informe detallado de actividades relevantes desarrolladas durante el ejercicio y planificadas para el año siguiente, del cumplimiento de los planes de mejoras, desarrollo y expansión, de los avances en el desarrollo, gestión y ejecución de proyectos, y de la performance de los servicios que presta. En dichos informes deberán justificarse fundadamente los incumplimientos incurridos, si los hubiere, y proponerse la manera de subsanarlos; ello no obstante el deber de informar anticipadamente sobre hechos que pudieren ocasionar los incumplimientos señalados.
- s)** En general suministrar en término, forma y contenido toda la información requerida por la Autoridad de Aplicación, sea periódica o no; y permitirle en todo momento tanto la realización de inspecciones en sus obras e instalaciones y en sus oficinas administrativas, como el acceso a las documentaciones que le sean solicitadas.
- t)** Publicar regularmente toda la información necesaria para que los usuarios puedan tener conocimiento general sobre el servicio, planes de mejoras, desarrollo y expansión y el régimen de tarifas. Informará asimismo acerca de los niveles de calidad del agua del servicio bajo su responsabilidad, los valores máximos permitidos y aconsejables. y de los programas y/o gestiones para su logro.

Lo inherente a este inciso podrá cumplimentarse poniendo la información a disposición la sede pertinente de la prestataria, de la Autoridad de Aplicación y del Municipio correspondiente.

- u)** Cumplir y hacer cumplir el reglamento del Usuario, relativo al servicio que presta; debiendo además atender y dar respuestas a solicitudes y reclamos pertinentes de los usuarios, habilitando oficinas y medios a tales fines.
- v)** Colaborar con la Autoridad de Aplicación en el desarrollo y concreción de planes, proyectos y programas de actividades orientados a fortalecer el conocimiento y divulgación de la importancia de los servicios sanitarios para la salud y del adecuado uso y mantenimiento de éstos.
- w)** En general, dar cumplimiento a las estipulaciones de la presente normativa, normas concordantes y actos reglamentarios.-

Artículo 33.- Programa de operaciones y condiciones diferenciales del servicio. El objetivo central de los programas de operaciones de la prestataria es la provisión del servicio a niveles de calidad que se consideren apropiados para los usuarios, en los plazos que se establezcan.

Si por razones de orden práctico no imputables al prestatario, resultare la imposibilidad de alcanzar inmediatamente los niveles exigidos de servicio, con fundamento en los análisis y estudios técnicos que justifiquen la adopción de la medida, la Autoridad de Aplicación podrá otorgar dispensas con carácter excepcional indicando un plazo determinado para operar con niveles de servicio de menores exigencias.

En particular, considerando el contexto territorial en orden al recurso hídrico, a la situación geográfica y/o económica particular de las diversas zonas de la provincia del Chaco, se podrán acordar pautas diferenciales de exigencia de metas según plazos especiales, que permitan una implementación equitativa de las normas regulatorias. El ejercicio de dicha facultad requerirá la verificación previa de la existencia de las referidas situaciones particulares, y deberá estar fundado en los estudios técnicos necesarios que justifiquen la adopción de la medida.

Estas dispensas no procederán en orden a los niveles de calidad exigidos para al agua de consumo humano y para los efluentes, los que se registrarán conforme las normas provinciales aprobadas como Anexos C y D respectivamente de la presente normativa.

Artículo 34.- Plan de Acción de Emergencia Sanitaria (PADES). El PADES es un instrumento de contingencia (Anexo A) que establecerá las medidas y acciones a ser ejecutadas por la entidad prestataria en caso de situación de emergencia del servicio a su cargo, así como también identificará a las personas responsables a ser notificadas de emergencia, debiendo contemplar al menos:

- a) Identificación y análisis de las posibles situaciones de emergencia, nivel de alerta asociado a ella;
- b) Procedimientos para identificación del mal funcionamiento o de condiciones potenciales de fallas en el servicio propiamente dicho, y/o fallas o roturas en las obras de infraestructura e instalaciones;
- c) Procedimientos preventivos y/o correctivos a llevar a cabo en situaciones de emergencia, con indicación del/los responsable/s de las medidas y acciones pertinentes;
- d) Estrategia o medio de divulgación y alerta para las comunidades potencialmente afectadas en situación de emergencia.

Cada PADES debe estar disponible en la sede de la prestataria y en organismos provinciales y municipales involucrados, así como también ser informado a la Autoridad de Aplicación y organismos de defensa civil.-

Artículo 35.- Atribuciones de las prestatarias. Constituyen atribución de las prestatarias:

- a) Celebrar convenios para el cumplimiento de sus fines, con personas físicas o jurídicas de derecho público o privado del orden internacional, nacional, provincial, municipal, regional o comunal. Solicitar colaboración del Estado en la gestión y ejecución de obras en casos necesarios.
- b) Captar, extraer y explotar aguas superficiales y/o subterráneas en todo el territorio de la Provincia para la prestación de los servicios a su cargo, con autorización previa de la Administración Provincial del Agua y de la Autoridad de Aplicación, sin otras limitaciones que su cupo de volúmenes y/o caudales correspondientes a dichas autorizaciones, y el uso racional del agua exclusivamente en el servicio sanitario que presta. Cuando se trate de aguas subterráneas el prestador deberá hacer estudios periódicos de la fuente empleada para detectar posibles incidencias en el recurso derivadas de su explotación u otros factores; los mismos se desarrollarán con la periodicidad o en la oportunidad que indique la Autoridad de Aplicación, a la que reportará informes de tales estudios con sus conclusiones y recomendaciones.
- c) Utilizar cuerpos de agua como receptores de efluentes cloacales tratados de conformidad a las normas en vigencia, previa autorización de la Administración Provincial del Agua y de la autoridad ambiental de la Provincia en lo que compete a cada una; sin otro gravamen que el pago de los aranceles, tasas y costos vinculados a inspección de obra, inherentes al poder de policía provincial y municipal y a otros servicios efectivamente recibidos. Serán de aplicación las reglas pertinentes indicadas en el precedente Capítulo y en Anexo B.
- d) Disponer de las fases y subproductos sólidos, líquidos y/o gaseosos resultantes de efluentes cloacales, teniendo en cuenta las normas en vigencia, las disposiciones técnicas sobre tratamiento de los mismos y otras que pueda dictar la Autoridad de Aplicación.
- e) Solicitar y gestionar la expropiación, constitución de restricciones al dominio y/o servidumbres necesarias para la prestación de los servicios o ejecución de nuevas obras e instalaciones destinadas al cumplimiento de sus fines, dando intervención a la Autoridad de Aplicación en lo que a ésta compete.
- f) Acordar con otras personas físicas o jurídicas prestatarias de servicios públicos, el uso común del suelo o subsuelo y de los recursos naturales, cuando sea necesario para la construcción y explotación de las obras previstas y la ejecución de los Planes de Mejoras, Desarrollo y Expansión con la correspondiente aprobación de la Autoridad de Aplicación.
- g) Utilizar la vía pública, el suelo y subsuelo para la obtención de fuentes de agua, tendidos e instalación de cañerías, cables conductos e general y otras obras o construcciones afectadas al Servicio; en todos los casos observando las disposiciones en vigencia aplicables, y sin otro gravamen que el pago de los aranceles, tasas y costos vinculados a inspección de obra, inherentes

al poder de policía provincial o urbano y a otros servicios efectivamente recibidos.

- h) Intervenir, en el espacio público, sobre las obras e instalaciones del servicio de agua y/o saneamiento de su responsabilidad; pudiendo efectuar en ellas adecuaciones, ampliaciones, remociones, reparaciones, conexiones, desconexiones, ampliaciones, reducciones, cortes o interrupciones, y en general modificaciones. En todos los casos, finalizados los trabajos, la prestataria efectuará las reposiciones, reparaciones y acondicionamientos necesarios sobre las partes del espacio público afectado.
- i) Efectuar y registrar mediciones de caudales, volúmenes y demás parámetros de su competencia.
- j) Facturar las prestaciones a usuarios -cualquiera fuere la personería y la calidad de usuario del servicio de agua y/o saneamiento- y percibir una compensación económica por cada servicio de agua y/o saneamiento, con tarifas y/o tasas relacionadas a costos de prestación y a condiciones de facturación de los servicios, en los términos de las disposiciones relativas al Régimen Económico y a Obligaciones de Cobro y de Pago del Servicio; y modalidades que establezcan las Normas Aplicables, en lo inherente y concordante. Podrá solicitar colaboración del Estado Provincial en situaciones en las que se requiera recurrir a cobros compulsivos
- k) Previas intimaciones respectivas, proceder sucesivamente a la reducción y al corte de servicios en casos en que se comprueben deficiencias en las instalaciones conectadas al sistema, que perturben la normal prestación u ocasionen perjuicios a la prestataria o terceros, y en casos de falta de pago en la forma y condiciones que se reglamente. Gestionar judicialmente el cobro de las deudas por servicios impagos mediante el correspondiente juicio de apremio.
- l) Proceder de oficio a la anulación de fuentes alternativas en los casos previstos en la presente ley, cuando el mantenimiento de las mismas ocasione o signifique comprobadamente un riesgo para la salud pública o el suministro del servicio. En caso de oposición, podrán requerir el auxilio de la fuerza pública con intervención de la Autoridad de Aplicación.
- m) Efectuar propuestas a la Autoridad de Aplicación, relativas a cualquier aspecto de la prestación del servicio de agua y saneamiento.
- n) En general, ejercer todas las atribuciones que se le otorguen y/o acuerde con la Autoridad de Aplicación, y aquellas que les sean indispensables para asegurar la prestación eficaz y eficiente de los servicios a su cargo.-.

CAPÍTULO 5: USUARIOS DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

Artículo 36.- Del derecho genérico de los usuarios. Todos los Usuarios que habiten o se establezcan en el territorio de la provincia del Chaco tienen derecho a la efectiva prestación de servicios de agua y saneamiento; cuyo ejercicio pleno es posible de materializar en plazos y condiciones que permitan las posibilidades

reales del servicio y su propia situación como usuario del mismo, actual o potencial, deudor o regularizado, y conforme el alcance, calidad de suministro, particularidades locales y demás pautas establecidas en la presente Ley y normas aplicables concordantes; Asimismo todo usuario actual o potencial tiene derecho a un trato digno y equitativo, a la información adecuada y veraz, y a constituir organizaciones de usuarios sin fines de lucro a los fines previstos en esta Ley.

Artículo 37.- Derechos de los usuarios actuales. En el marco del artículo anterior, constituyen derechos de los usuarios actuales:

- a) Recibir de los prestadores reconocidos en el marco de esta Ley los servicios disponibles conforme niveles de calidad y obligaciones establecidas tanto para prestatarios como para usuarios.
- b) Recibir información general sobre las características y modalidades de los servicios, en detalle y suficiencia tales que puedan posibilitar al usuario el conocimiento global de los mismos y el ejercicio de sus derechos.
- c) Conocer el régimen tarifario aprobado para el servicio que le atañe y sus modificaciones; ser informado, con anticipación razonable, acerca de los montos que debe pagar en contraprestación de por los servicios y/o recibir en tiempo oportuno las facturaciones correspondientes, de las que deberán surgir con claridad los conceptos y los importes adeudados, y la fecha de vencimiento de la factura. En el caso de servicios agua y de saneamiento suministrados por redes, en cada factura se deberá informar al usuario las fechas de vencimiento de la misma y de la próxima facturación.

En casos de no recepción de facturaciones, subsiste la obligación de su pago.

- d) Solicitar a la prestataria inspecciones sobre las conexiones, medidores y en general instalaciones de agua y saneamiento en el domicilio servido, las que procederán previo abono de las tasas correspondientes por parte del usuario.
- e) En general, solicitar a la prestataria mediciones o estimaciones de contraste por medios o cálculos técnicos idóneos en el marco de esta Ley, sobre volumen o caudal y calidad del agua suministrada, conforme se reglamente.
- f) Ser informado con suficiente anticipación sobre disminuciones o interrupciones de servicio que se programen por razones operativas y duración provisoria estimada de las mismas.
- g) Recibir, cuando correspondiere, una bonificación de compensación por indisponibilidad o interrupción no programadas de los servicios por causa atribuible al prestador del servicio; bonificándose el importe pertinente en la primera facturación posterior a la indisponibilidad o interrupción no programadas.

- h) Requerir información y peticionar el cumplimiento de planes de mantenimiento, expansión y, en lo aplicable, mejoras en los atributos de calidad del servicio.
- i) Recurrir ante la Autoridad de Aplicación cuando el prestador del servicio no hubiese atendido o hubiera rechazado sin fundamentos los reclamos atinentes al servicio o a sus relaciones recíprocas; o cuando proceda recurso directo ante la misma en virtud de la presente Ley.
- j) Denunciar y documentar ante la Autoridad de Aplicación omisiones o irregularidades comprobables en el cumplimiento de las obligaciones de la prestataria o agentes de la misma, así como también acciones de otros usuarios, que en cualquiera de los casos pudieren afectar sus derechos como usuario, perjudicar los servicios o alterar el ambiente.
- k) Todos los demás derechos correlativos a las obligaciones impuestas a los prestatarios o prestadores de servicios de agua y saneamiento.

Artículo 38.- Derechos de los usuarios potenciales. Asiste a los usuarios potenciales, los derechos del anterior artículo que, en lo pertinente, les sean aplicables; así como también el de solicitar a la prestataria la información y el cumplimiento de metas que se le hayan fijado respecto de expansión del servicio, y el derecho de recurrir en consulta ante la ante la Autoridad de Aplicación.

Artículo 39.- Derecho especial de usuarios potenciales. Con autorización previa de la prestataria, en el de expansión que corresponda a su zona, distrito, localidad, o paraje de prestación, los usuarios potenciales en conjunto, organizados bajo cualquier figura jurídica sin fines de lucro, podrán construir y operar sistemas de captación, potabilización y distribución de agua segura y/o de colección, tratamiento y disposición final de desagües cloacales, a los fines extender hasta sus domicilios los servicios regulados en esta Ley y/o realizar cualquier prestación complementaria de tales servicios, de conformidad a las siguientes estipulaciones generales:

- a) Podrá la mencionada organización de usuarios realizar los proyectos, construcción y operación de tales sistemas, por sí o por terceros debidamente acreditados y autorizados por la Autoridad de Aplicación; siempre que no existan obras proyectadas por la entidad prestataria y aprobadas por dicha Autoridad con fecha cierta de ejecución.
- b) Los pedidos de autorización a efectos de esta disposición legal serán realizados por la figura jurídica que aglutine a los usuarios potenciales involucrados, y posteriormente resueltos por la prestataria en vigencia en un plazo máximo de sesenta (60) días calendario desde su presentación completa y en forma, plazo prorrogable fundadamente por única vez e igual período. Vencido este plazo sin que la prestataria en vigencia se hubiere expedido, la solicitud de autorización se considerará automáticamente denegada.

- c) Los rechazos o denegaciones de solicitudes de autorizaciones y/o de solicitudes de aprobaciones técnicas deberán ser razonables y justificados. En caso de negativa o silencio de dicha prestataria, el conjunto de usuarios potenciales podrá interponer un recurso ante la Autoridad de Aplicación, dentro de los treinta (30) días calendario a partir de la notificación o vencimiento del plazo correspondiente. En caso de conflictos, controversias o diferendos será de aplicación lo dispuesto al respecto en la presente Ley.
- d) Las autorizaciones y denegatorias a efectos de este artículo deberán ser comunicadas de inmediato por la prestataria a la Autoridad de Aplicación.
- e) Los proyectos, las obras, su consecuente habilitación y la posterior prestación del servicio por medio de los sistemas autorizados conforme a este artículo, deberán sujetarse a esta Ley y normas aplicables concordantes, siendo de estricta aplicación las obligaciones de los prestatarios y las competencias de la Autoridad de Aplicación.
- f) Los sistemas que en las circunstancias previstas en este artículo sean autorizados por la prestataria actuante deberán contar con la aprobación de ésta según normas técnicas en vigencia; y la construcción de las obras deberá ser inspeccionada por la misma, con el soporte técnico y logístico del organismo técnico provincial con competencia en obras públicas de agua y saneamiento y de la Autoridad de Aplicación.
- g) La prestataria interviniente se responsabilizará plenamente por las autorizaciones y aprobaciones técnicas que otorgue en orden a las construcciones de obras del nuevo sistema.
- h) Los derechos sobre los sistemas construidos por sí o terceros por la organización de usuarios contemplada en este artículo, tendrán carácter precario y cesarán al momento en que la mencionada prestataria esté en condiciones de hacerse cargo pleno de su explotación y de la provisión efectiva del servicio, de acuerdo a esta Ley y normas aplicables en concordancia con la misma; o bien quedarán consolidados en favor de la organización de usuarios sin fines de lucro, para la operación del sistema por sí o terceros en la nueva área servida.
- i) En cualquiera de los casos las autorizaciones expresas que confiera la prestataria en ejercicio establecerán las cuantías y los mecanismos de actualización y de reconocimiento y compensación de gastos que no puedan ser recuperables a través del cargo de infraestructura, y que hayan sido probadamente efectuados por la organización de usuarios interviniente, por sí o terceros distintos a dicha prestataria.
- j) En caso de que los derechos sobre los sistemas construidos por la organización de usuarios se consoliden en favor de la misma para la operación del sistema por sí o terceros en la nueva área servida, los bienes afectados a las prestaciones serán privativos de dicha organización de usuarios sin fines de lucro; la que además podrá:
 - 1. Disponer reducciones de los márgenes de rentabilidad contenidos en las tarifas en beneficio de sus integrantes, sin que en ningún caso y bajo

ninguna razón dejen de percibirse los costos de amortización, prestación y mantenimiento del servicio.

2. Organizar fondos mutuales o de otra naturaleza inspirados en la solidaridad social, para colaborar con sus integrantes que no pueden asumir el pago pleno de las tarifas.
 3. Ser sujeto de recepción de subsidios expresos contenidos explícitamente en los Presupuestos Anuales, provincial o municipal correspondiente según se convenga; y cuya aplicación controlará la ADRyC.-
- k) La prestataria en vigencia y la organización de usuarios serán responsables solidarios por la correcta provisión del nuevo servicio, aún actuando ésta como subconcesionaria o subcontratada de la primera.

Artículo 40.- Obligaciones de los usuarios. Constituyen obligaciones de los usuarios:

- a) Uso de los servicios públicos de agua y saneamiento. Siendo que los servicios sanitarios se vinculan directamente con la protección de la salud de las personas en particular, y en general con la salud pública y ambiental, todos los usuarios están obligados al uso de servicios de agua y saneamiento allí donde éstos se presten, cualquiera sea el medio y modalidad de prestación legalmente autorizada conforme esta Ley; debiendo hacer un uso racional y eficiente de los mismos.
- b) Conexión obligatoria a redes sanitarias públicas. Los inmuebles edificados deben conectarse obligatoriamente a la red de agua y/o a la de desagües cloacales domiciliarios a su disposición. En los plazos y condiciones que se reglamenten se cegarán los pozos absorbentes que existieren en el inmueble; así como también se anularán las perforaciones y pozos de agua preexistentes, excepto que en este caso el usuario gestione permiso especial conforme procedimiento que la presente Ley prevé para el mantenimiento de fuentes alternativas de agua.
- c) Obligación de pago de los servicios públicos de agua y saneamiento. Siendo que las prestaciones de servicios sanitarios tienen un costo a ser solventado por los beneficiarios del mismo, es obligatorio el pago de las tarifas impuestas.
- d) En orden al inciso anterior, obligación de pago de los distintos conceptos que integran el sistema tarifario. En el caso de servicios sanitarios que disponen de redes de distribución o redes colectoras, el usuario está obligado a pagar el mantenimiento y disponibilidad de redes e infraestructura o cargo fijo del servicio, independientemente de su conexión y uso, conforme el régimen tarifario correspondiente.
- e) Mantenimiento de las instalaciones internas. Siendo que los desperfectos, mal funcionamiento, o falta de mantenimiento o higiene de las instalaciones internas (o del usuario) comprometen el funcionamiento, eficiencia, calidad del servicio sanitario y la salud de las personas, el usuario tiene la obligación

de mantener sus instalaciones internas en óptimas condiciones operativas e higiénicas. Respecto de éstas, cuando se tratare de agua para consumo humano (bebida y preparación de alimentos, con o sin cocción) el usuario debe asegurar y mantener las condiciones de higiene, sanidad, desinfección y aislación atmosférica y de factores potencialmente contaminantes, tanto del tanque, cisterna u otro depósito o receptáculo de recepción y almacenamiento del agua recibida, como del agua misma en su manipulación intradomiciliaria.

- f)** Accesibilidad a la caja o punto de conexión. El usuario está obligado a dejar libre, visible y accesible el punto que limita la responsabilidad entre la prestadora y el usuario: punto de conexión o caja de conexión que incluye la llave maestra y el medidor, si correspondiere.
- g)** Inspecciones de oficio. El usuario debe permitir al prestatario y/o Autoridad de Aplicación toda inspección de oficio de las conexiones, medidores y en general instalaciones domiciliarias de agua y saneamiento; sin cargo para el usuario. En caso de negativa injustificada a permitir la inspección o a prestar colaboración al respecto, y existiendo la posibilidad o presunción de posibilidad de producirse un peligro inminente para la salud de los ocupantes del domicilio o de la población, o bien de un perjuicio grave para el sistema, el prestador queda facultado a efectuar el corte del servicio previa exposición policial; debiendo comunicar la medida y su fundamentación, con documentaciones del caso, a la Autoridad de Aplicación.
- h)** Permitir y facilitar que la prestataria de servicios de agua y/o saneamiento efectúe, en las obras e instalaciones ubicadas en el espacio público, adecuaciones, ampliaciones, remociones, reparaciones, conexiones, desconexiones, ampliaciones, reducciones, cortes o interrupciones, y en general modificaciones de obras e instalaciones.
- i)** Notificaciones. Todo usuario está obligado a notificar al prestatario cualquier desperfecto que observare en las instalaciones del domicilio receptor de los servicios de agua y saneamiento, así como también toda modificación en la titularidad del inmueble.
- j)** Pretratamiento. Excepto los efluentes específicos de excretas humanas, previo al vertido autorizado a la red cloacal el usuario debe dar el tratamiento establecido en las normas y reglamentos en vigencia a los residuos comerciales, industriales, agropecuarias, hospitalarias, tóxicos o de cualquier tipo en general distinto a los sanitarios propiamente dichos. A estos efectos el usuario debe efectuar ante la entidad prestataria la denuncia de tales circunstancias, y solicitar anticipadamente autorización para el plan de tratamiento a aplicarse previo al volcamiento a la red, para la consideración de aprobación de la entidad prestataria y conformidad de la Autoridad de Aplicación.

Artículo 41.- Instalaciones internas. Los propietarios, consorcios de propietarios, poseedores y tenedores de inmuebles localizados en el área servida, están obligados a instalar los servicios domiciliarios internos de agua y desagües cloacales, así como también mantener las instalaciones en buen estado de conservación y uso; pudiendo en todos los casos recibir, sin cargo, asesoramiento técnico de la prestataria.

Las prestatarias estarán facultados para verificar y controlar las instalaciones de servicios domiciliarios internos de agua y desagües cloacales, pudiendo ordenar las modificaciones y adecuaciones que resulten necesarias para la normal prestación del servicio.

Artículo 42.- Prohibiciones generales. En todo el territorio del Chaco está prohibido:

- a) La descarga a la red de colectoras cloacales de todo desagüe pluvial o proveniente de actividades comerciales, industriales, agropecuarias, hospitalarias o de otro tipo, sin expresa autorización y tratamiento previos conforme la presente Ley prevé en orden al pretratamiento de los mismos.
- b) La descarga o vertido en las redes cloacales de sustancias en cualquier estado físico que tenga o adquiera propiedades corrosivas o destructoras de los materiales que constituyen las obras de infraestructura de saneamiento, o contaminantes de forma que imposibiliten la reutilización de las aguas, o cuya nueva utilización tan sólo sea posible a través de la aplicación de técnicas o tecnologías de difícil acceso o que lo sean con costos prohibitivos.
- c) La descarga, vertido o desagote, en forma directa o indirecta, de sustancias potencialmente contaminantes o prohibidas, cualquiera fuese su tipo y estado físico, en la superficie del terreno natural, suelo, subsuelo o en profundidad, en lagunas u otros espejos de agua, en cauces permanentes, estacionales o temporarios de agua, o en paleocauces.
- d) La descarga o volcamiento de desagües cloacales en la superficie del terreno natural, en lagunas u otros espejos de agua, en cauces permanentes, estacionales o temporarios, o en paleocauces, y en general en suelo, subsuelo o en profundidad (salvo sangrías, pozos absorbentes y estructuras similares debidamente autorizadas y construidas), sin expresa autorización de la Administración Provincial del Agua (APA) y tratamiento previos conforme normas y reglamentaciones en vigencia.
- e) La descarga o volcamiento de desagües cloacales, con o sin tratamiento previo, a la vía pública rural o urbana, y a las redes pluviales superficiales o subterráneas.
- f) La sustracción, violentación, alteraciones o cualquier modificación en las cañerías, equipamientos, medidores y/u otras instalaciones del servicio público de agua o de saneamiento; así como también la realización de conexiones clandestinas, o tomas, captaciones, desvíos, derivaciones o

cargas de agua desde las instalaciones de las prestatarias sin la expresa autorización formal de ésta.

El incumplimiento de los incisos a), b, y/o f) se sujetará, en lo pertinente, al régimen contemplado en los Capítulos 11 y 13 del presente Título.

Detectada o denunciada que fuere cualquier incumplimiento de lo previsto en los incisos c), d) y/o e), la Administración Provincial del Agua, en coordinación con la máxima autoridad ambiental de la Provincia y con la Municipalidad correspondiente, deberá articular y concretar la instrumentación de las medidas necesarias y suficientes para que el emisor proceda al inmediato cese de la descarga o volcamiento prohibido; bajo pena de procederse, con cargo al emisor, al cegamiento o bloqueo de tales descargas o volcamientos prohibidos; y sin perjuicio de la aplicación de multas y otras sanciones que correspondieren conforme disposiciones legales en vigencia, y demás acciones civiles y penales a que hubiere lugar.

CAPÍTULO 6: AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Artículo 43.- Agencia de Desarrollo, Regulación y Control de Servicios de Agua y Saneamiento. Créase con carácter autónomo la Agencia de Desarrollo, Regulación y Control de Servicios de Agua y Saneamiento (ADRYC o Agencia), entidad autárquica del Gobierno de la Provincia del Chaco, que por ende goza de personalidad jurídica propia, con plena capacidad para actuar con arreglo a las normas de los Derechos Públicos y Privado. Tendrá autonomía funcional, autarquía presupuestaria, individualidad financiera, patrimonio propio; y plena capacidad para darse su organización interna, para organizar y articular el desarrollo de estrategias y actividades regulatorias y de vigilancia de las prestaciones de servicios sanitarios y a su difusión en toda la provincia del Chaco, en el marco del Sistema Integrado Provincial de Desarrollo, Regulación y Control de Servicios de Agua y Saneamiento, conforme esta Ley y normativas concordantes; y para comparecer en juicio como actor, demandado o en la calidad procesal que correspondiere.

La Agencia esta investida, en los términos de esta normativa, de las potestades necesarias y suficientes para impulsar el desarrollo, y atender la regulación y control de todos los servicios de agua y saneamiento en la provincia del Chaco, siendo Autoridad de Aplicación de la presente Ley y normas y actos que en su consecuencia se dicten.

Artículo 44.- Potestades jurisdiccionales. La Agencia tiene las potestades propias de su carácter de tribunal administrativo; y ejercerá facultades jurisdiccionales sobre el desarrollo, regulación e instrumentación y coordinación del control de todos los servicios públicos de agua y saneamiento que se presten en El Chaco. Todos los usuarios y prestatarios de servicios públicos de Agua y Saneamiento, sean personas físicas o jurídicas de derecho privado o público, se encuentran sujetos a la legítima atribución regulatoria, fiscalizadora y sancionatoria de la Agencia de Desarrollo, Regulación y Control (ADRYC), que

se ejercerá en la forma prevista en la presente Ley, normas y actos administrativos y reglamentarios concordantes, de conformidad con las políticas sectoriales del Gobierno Provincial.

En contribución a la protección de las fuentes de agua en toda la provincia, la instrumentación de sus potestades alcanza también a todos los establecimientos de cualquier tipo, rubro, fin y razón social, en lo que respecta a la generación, tratamiento, traslado, vertido y/o disposición de sus respectivos efluentes.-

Artículo 45- Sede y domicilio. Tendrá sede y domicilio en la ciudad de Resistencia; pudiendo establecer subsedes zonales en el territorio de la Provincia, así como también oficinas temporarias o permanentes en el país y extranjero, cuando y donde las circunstancias lo requieran.

Artículo 46.- Competencia. Como autoridad de aplicación de la presente Ley, la Agencia tiene amplias facultades o atribuciones legítimas para disponer lo necesario a efectos de que los servicios de agua y saneamiento sean prestados con los alcances, extensiones y niveles de calidad exigibles con resguardo del ambiente, y con arreglo a tarifas debidamente aprobadas; teniendo incumbencias en todo lo inherente a:

- a) Regulación y control de la totalidad de prestaciones de servicios públicos de agua y saneamiento en el territorio de la provincia -sean de gestión pública, privada o mixta-, cualquiera fuere la jurisdicción del prestador y el medio, modalidad y magnitud del suministro. Revisión de situación y capacidades jurídico-legales, económico-financieras y técnico-industriales de las prestatarias de servicios sanitarios.
- b) Dictado, interpretación, armonización, revisión, perfeccionamiento, actualización y control de normas técnicas y en general reglamentaciones atinentes al ejercicio de sus potestades regulatorias y de contralor, que obliguen a los usuarios y a las prestatarias en general, sean cuales fueren las modalidades y medios utilizados para el suministro de los servicios. Impulso, compatibilización y establecimiento de criterios de efectividad y de indicadores y modelos para evaluar su propia gestión y la de los prestadores tomando en cuenta, en estos casos, diferencias regionales, características de los servicios, aspectos socio-económicos y ambientales, entre otros factores.
- c) Intervención en los procesos y contratos inherentes al otorgamiento de concesiones, subconcesiones y licencias de servicios en favor de prestatarias que acrediten capacidades jurídico-legales, económico-financieras y técnico-industriales exigidos, y requisitos complementarios que se establezcan
- d) Control del mantenimiento, reparaciones y reposiciones que obligatoriamente deben hacer los prestadores, de y en los bienes muebles e

inmuebles afectados a los servicios, en particular de la infraestructura, instalaciones y equipos.

- e)** Participación en la formulación, actualización y seguimiento de políticas provinciales en materia de agua y saneamiento. Proposición, formulación e implementación de medidas y acciones orientadas a una mejor calidad y crecientes desarrollo y eficiencia de servicios sanitarios.
- f)** Aprobación y control de cuadros tarifarios y precios de los servicios, protegiendo en ello el interés de los usuarios. Verificación de pertinencia de revisiones y ajustes que deban realizarse o aplicarse a las tarifas y precios; debiendo ser justos y razonables, con equilibrio entre las necesidades económicas y financieras de las prestatarias para la prestación, mejoras, desarrollo y expansión de servicios que cumplan con los atributos de calidad exigibles y el acceso de los usuarios a los servicios.
- g)** Aprobación, difusión y control de planes de inversión, planes de mejoras, desarrollo y expansión, planes de adecuación, programas y proyectos de obras o de otras acciones, así como también de medidas de mitigación o remediación presentados por los prestatarios. Aprobación de metas y/o regímenes temporales atenuados de cumplimiento de alguna/s obligación/es de los prestadores.
- h)** Requerimiento de informes, a los prestadores, para efectuar el control del servicio pertinente. Análisis y expedición acerca de los informes, planes, programas, medidas y proyectos presentados por los prestadores.
- i)** Establecimiento de circunstancias, condiciones y formalidades en las que la prestataria, previa autorización de la Agencia y de la autoridad concedente podría subconcesionar o subcontratar parcialmente -hasta un veinticinco por ciento (25%)- la prestación del servicio; del que la prestataria original es y seguirá siendo responsable plena, aun con la implementación de esta disposición.
- j)** Aprobación, en materias de su competencia, de actos que realicen los prestadores cuando eventualmente actúen como sujetos ocupantes, o en virtud de restricciones al dominio o servidumbre necesarias para las prestaciones sanitarias que se regulan.
- k)** Establecimiento de procedimientos de consultas de opinión y audiencias públicas específicas. Articulaciones operativas y, si es el caso, gestión de conflictos entre partes del sistema o subsistema pertinente.
- l)** Control y resolución fundada de controversias en general, y de reclamos irresueltos de usuarios por deficiencias en el servicio o fallas en la facturación. Revisión y modificación o suspensión de autorizaciones o denegatorias emitidas por los prestadores.
- m)** Intervención cautelar, por tiempo limitado y con autorización del Poder Ejecutivo Provincial, de la prestación de algún servicio de agua y/o saneamiento, cuando -por causa imputable al prestador- se vea afectado en

forma grave y urgente el servicio, la salud de la población o el ambiente.

- n) Aplicación de incentivos y sanciones relativos a la actividad regulada, de conformidad con políticas sectoriales y territoriales de la Provincia. Formulaciones e implementaciones colaborativas de programas de educación y difusión formativa e informativa, en orden a concientizar permanentemente acerca de la importancia de la política pública sectorial de agua y saneamiento, de los servicios sanitarios en beneficio de la salud pública y del sostenimiento económico-financiero de los mismos.
- t) Ejercicio de potestades ablatorias, expropiatorias, de restricciones y limitaciones al dominio, sancionatorias y en general las implícitas para realizar, cumplir y hacer cumplir la presente normativa provincial y normas y actos concordantes que resulten aplicables en orden a los servicios de agua y saneamiento en la provincia del Chaco.
- u) En general, realización de todo acto, medida y/ acción necesarios y/o convenientes para el buen ejercicio de sus cometidos de impulsar el desarrollo, y atender a la regulación y control y satisfacción de los objetivos de la presente Ley.-

Artículo 47.- Funciones. Para el cumplimiento de sus fines, y en el marco de sus atribuciones legales, la ADRyC tendrá las siguientes funciones:

- a) Solicitar a los prestatarios el establecimiento de objetivos y metas técnicas, económicas y financieras para cada servicio en las distintas zonas, distritos, localidades o parajes de prestación, tanto para mejoramiento y desarrollo como para ampliación o extensión de sus prestaciones; acordadas las cuales se convendrá formalmente el cumplimiento de compromisos detallados por la en sus planes de mejoras, desarrollo y expansión.
- b) Regular y controlar la prestación del servicio de agua en toda la provincia; incluyendo la verificación -continua, regular o aleatoria- de calidad del agua suministrada al usuario, cantidad suministrada, continuidad o frecuencia, regímenes tarifarios y precios, entre otros aspectos; funciones que llevará a cabo cualesquiera sea el medio de distribución o entrega del agua (redes domiciliarias, camiones cisternas, bidones, grifos públicos u otros medios) e incluso en los domicilios usuarios del agua. Regular y controlar la prestación del servicio de saneamiento cloacal en toda la provincia; incluyendo los parámetros cualicuantitativos y funcionales en las etapas y procesos de recolección, tratamiento, conducción y disposición final de efluentes cloacales.
- c) Ejercer el poder de policía, comprensivo de la regulación y el control de prestaciones de servicios de agua y saneamiento, y de la protección del ambiente en general y del agua en particular por acción del vertido de efluentes de cualquier naturaleza, pudiendo dictar las reglamentaciones necesarias para el cumplimiento de su cometido en el marco de su capacidad regulatoria, y controlar su aplicación y las de las normativas vigentes en la

materia; así como también ejercer sus facultades de inspección, revisión, sanción y demás atribuciones propias de sus competencias.

- d)** Proponer al Poder Ejecutivo Provincial, para su aprobación, pliegos licitatorios, contratos y actos administrativos relativos a concesiones y licencias de servicios públicos de agua y/o saneamiento. La Agencia de Desarrollo, Regulación y Control de Servicios de Agua y Saneamiento es órgano de consulta natural de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia del Chaco, pudiendo asesorarles en todas las cuestiones en que su intervención, informe o dictamen le sea solicitado sobre materias o asuntos atinentes a su competencia.
- e)** Establecer y mantener actualizado un sistema informativo y registros técnicos, que permitan el eficaz ejercicio de la acción regulatoria y de contralor; para lo cual podrá requerir a los prestadores y demás entidades vinculadas al Sistema Integrado Provincial de Desarrollo, Regulación y Control de Servicios de Agua y Saneamiento. toda la información necesaria.
- f)** Requerir al usuario el acondicionamiento sanitario y funcional de instalaciones sanitarias, su enclave y entorno inmediatamente adyacente a las mismas; o realizarlos por sí o terceros con cargo al usuario según se reglamente.
- g)** Requerir al prestador y/o al usuario las medidas para corregir eventuales infiltraciones, pérdidas o fugas u otras fallas en el servicio de agua y saneamiento; controlar su instrumentación y sancionar su incumplimiento.
- h)** Regular las tarifas de los servicios, aprobar los cuadros tarifarios y sus modificaciones, y controlar el cumplimiento; sea cuales fueren la jurisdicción y figura jurídica de la entidad prestataria o prestataria, y el medio, modalidad y magnitud del suministro. Precederá a la aplicación tarifaria su previa publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Controlar el cumplimiento del régimen tarifario vigente, y de toda otra obligación pertinente de índole comercial, que deba cumplir cada prestador.
- i)** Aprobar las modificaciones, revisiones, actualizaciones y ajustes de las normas provinciales de calidad del agua para consumo humano y de efluentes cloacales; así como también de los cuadros tarifarios y precios de los servicios a cargo de los prestadores.
- j)** Receptar, registrar, gestionar y hacer seguimiento de consultas, propuestas, avisos, denuncias, inquietudes y reclamos de usuarios; dando asesoramiento en orden al proceso de los trámites pertinentes. Dará respuesta en tiempo y forma, en cuanto de la Agencia dependa.
- k)** Dictaminar y resolver en todos los aspectos referidos a facturaciones de servicios, multas y/u otras sanciones; así como también y según le corresponda en lo atinente a rescisión, rescate o prórroga de concesiones, subconcesiones, subcontrataciones y licencias para la prestación.
- l)** Interpretar las normativas aplicables en vigencia. Controlar y aplicar multas y/u otras sanciones que corresponda.

- m) Cooperar con organismos públicos provinciales y nacionales, según corresponda, en lo relativo al desempeño de los prestatarios en tanto tal condición y en tanto agentes eventualmente contaminantes. Articular estrategias, medidas y acciones relacionadas a su incumbencia con organizaciones privadas o públicas del país o del extranjero.
- n) Intervenir en el proceso elaborativo, visar los proyectos y controlar el cumplimiento de planes de mejoras, desarrollo y expansión de los servicios y de los de planes, programas y proyectos de inversión, operación y mantenimiento a cargo de los prestadores.
- o) Impulsar el conocimiento de sociedad acerca de la importancia de los servicios sanitarios para la salud y del uso y mantenimiento de los mismos. Promover el uso racional del agua y protección de calidad de la misma.
- p) Coadyuvar con sus capacidades y colaboración en beneficio de funciones esenciales de salud pública, entre ellas:
 - 1. Vigilancia, investigación y control de riesgos hídrico-sanitarios;
 - 2. Desarrollo de políticas y capacidad institucional (propia y de los prestadores de servicios) para planificación y gestión;
 - 3. Continuas mejoras de sus propias potencialidades de regulación y control;
 - 4. Valoración y promoción del acceso equitativo servicios sanitarios;
 - 5. Morigeración de posibilidades de emergencias de y en los servicios sanitarios que puedan afectar la salud de la población o el ambiente.
- q) Dictar reglamentaciones y requerimientos necesarios relativos a ubicación geográfica, edificios y tecnológicos de las instalaciones de las prestadoras, y otras atinentes a su competencia.
- r) Difundir y publicitar domicilios físicos y virtuales de la ADRyC, teléfonos y horarios para facilitar al usuario la presentación de consultas, reclamos e inquietudes; así como también lo inherente a publicidad de sus actos y de su accionar en general. Mantener comunicación regular con autoridades del Gobierno Provincial e Intendentes, según el servicio que corresponda, para informar sobre aspectos de su responsabilidad institucional.
- s) En general, aplicar y fiscalizar el cumplimiento de la presente Ley, normas y actos concordantes; y ejercer todas las medidas y acciones derivadas del ejercicio de sus competencias, desarrollando capacidades de acción apropiadas a su condición.

Artículo 48.- Del ejercicio de potestades. Todos los usuario y prestatarios de servicios públicos de Agua y Saneamiento, sean personas físicas o jurídicas de derecho privado o público, se encuentran sujetos a la legítima atribución regulatoria, fiscalizadora y sancionatoria de la Agencia de Desarrollo, Regulación y Control (ADRYC), que se ejercerá en la forma prevista en la presente Ley, normas y actos administrativos y reglamentarios concordantes.

En protección directa e indirecta de las fuentes de agua en toda la provincia, la instrumentación de esta potestad de la Agencia alcanza también a todos los establecimientos de cualquier tipo, rubro, fin y razón social, en lo que respecta a la generación, tratamiento, traslado, vertido y/o disposición de sus respectivos efluentes.

El ejercicio de potestades relacionadas con la regulación y el control de las prestaciones de servicios de agua y saneamiento observará las siguientes pautas:

- a)** La Agencia de Desarrollo, Regulación y Control publicará en el Boletín Oficial de la Provincia los proyectos de normas reglamentarias que considere de significativa importancia y se proponga emitir. En el lapso de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de publicación toda persona física o jurídica que habite o esté establecida en la provincia del Chaco podrá presentar formalmente a la Agencia sus opiniones, comentarios y sugerencias fundadas que les mereciese el proyecto publicado; a las principales de las cuales la ADRyC hará referencia en los considerandos de la norma reglamentaria. Sólo bajo invocación fundada de razones de interés público podrá omitirse esta modalidad.
- b)** Dentro del mismo plazo previsto en el inciso anterior quienes manifiesten interés podrán solicitar se les permita la producción de prueba local en respaldo de las opiniones, comentarios y sugerencias formuladas en virtud de dicho inciso, la que será concedida por la ADRyC salvo que razones de interés público hicieren inconveniente tal producción u obstasen a la misma; en los considerandos de la norma reglamentaria se hará referencia a las pruebas producidas.
- c)** La Agencia tiene facultades para formular iniciativas y brindar opinión en relación a la planificación y ejecución de medidas no estructurales y acciones estructurales, en especial obras relativas a los servicios de agua y saneamiento. Antes de decidirse la elaboración y/o la ejecución de proyectos de tales medidas, acciones y obras, deberá obligatoriamente recabarse la opinión de la Agencia de Desarrollo, Regulación y Control de Servicios de Agua y Saneamiento acerca de las significación, implicancias y posibles consecuencias de la realización de las mismas en orden al/los servicio/s de agua y saneamiento.
- d)** La Agencia coordinará las gestiones conducentes al perfeccionamiento de los Anexos A, B, C, D y E de la presente Ley, todos los cuales forman parte indisoluble de la misma; así como también a su comunicación y difusión según estime pertinente y la articulación operativa con los prestadores del derecho público y privado involucrados y autoridades provinciales y municipales.
- e)** La Agencia tiene atribuciones para contemplar en los casos correspondientes las reales posibilidades de cumplimiento del prestador; pudiendo acordar, en relación a algunas obligaciones, las correspondientes

metas de alcance progresivo y/o regímenes temporales atenuados de cumplimiento.

- f) Toda cuestión contenciosa que se suscite entre prestadores, usuarios y terceros interesados en relación directa con la prestación de los servicios sanitarios alcanzados por la presente normativa, incluyendo las derivadas del ejercicio de potestades ablatorias y las responsabilidades por daños, será decidida por la Agencia de Desarrollo, Regulación y Control de Servicios de Agua y Saneamiento, con arreglo a procedimientos que la misma pueda establecer.
- g) A los fines de una mejor prestación de los servicios de agua y saneamiento regulados en esta Ley la ADReC está facultada a disponer servidumbres sobre los inmuebles, así como también meras restricciones al dominio de los particulares de conformidad a lo establecido en el Código Civil.
- h) La Agencia está facultada para solicitar al Poder Legislativo Provincial la declaración de utilidad pública a los fines de la ocupación de predios de particulares, actuando conforme parámetros y mecanismos previstos en la Constitución de la Provincia del Chaco, y leyes provinciales que según el caso correspondan.
- i) El ejercicio de sus potestades jurisdiccionales está exclusivamente sujeto al control judicial. Las decisiones adoptadas por la Agencia de Desarrollo, Regulación y Control de Servicios de Agua y Saneamiento, dentro de los límites de sus competencias y funciones en ejercicio de tales potestades jurisdiccionales, causan estado y podrán ser apeladas ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco, mediante un recurso concedido libremente con arreglo a las prescripciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia del Chaco, en las condiciones que indique la reglamentación.-

Artículo 49.- Sujeción administrativa y operativa. La Agencia se sujetará en su gestión financiera, patrimonial y contable a las disposiciones de la presente Ley, y las normas y disposiciones reglamentarias concordantes con la misma.

Ejercerá el control de los servicios y de sus prestadores a partir de los datos e información establecidos y los que requiera a las prestatarias, a cuyo suministro éstos están obligados; así como también mediante los relevamientos, investigaciones e inspecciones generales o especiales, de oficio o por denuncias recibidas, y que la Agencia realice o mande a realizar.

Las competencias y funciones de la ADReC serán ejercidas sobre cimientos de cooperación en la relación recíproca entre el que regula y controla en tanto Autoridad de Aplicación, el usuario y las prestatarias; y articulando en lo pertinente su accionar con el normal funcionamiento de los distintos tipos y diversidad de prestadores, de modo tal que no obstruyan indebidamente la gestión de los prestadores ni la elección, por parte de éstos, de los medios que consideren más adecuados para cumplir con sus obligaciones de conformidad a

la presente Ley, normas concordantes y actos que en su consecuencia se establezcan.

Artículo 50.- Directorio. La ADRyC será dirigida por un Directorio de tres (3) miembros nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo parlamentario; quienes durarán cinco (5) años en sus funciones, pudiendo ser redesignados. La remuneración de los mismos será establecida por el Poder Ejecutivo y deberá tener un nivel acorde con la responsabilidad e idoneidad propia de sus funciones y la dedicación exclusiva a las mismas.

Artículo 51.- Inhabilitaciones e incompatibilidades y remoción del Directorio. Recaerán sobre los miembros del Directorio las mismas inhabilitaciones e incompatibilidades que las establecidas para los jueces de la Provincia. No podrán ser removidos sino por las causales y el procedimiento establecido para el Juicio Político

Artículo 52.- Autoridades y Quórum. El Directorio, tendrá una (1) Presidencia y dos (2) Vicepresidencias. Quien ocupe la Presidencia será la máxima responsable de la ADRyC, ejercerá la representación legal de la misma y convocará y dirigirá las sesiones del Directorio. Preferentemente, uno/a de los/as Vicepresidentes será responsable de la cartera de los servicios de agua segura y el/la otro/a lo será de los servicios de saneamiento cloacal.

El quórum se constituirá con la asistencia de al menos dos (2) de los miembros del Directorio; cuyas decisiones se tomarán convenientemente con la participación de la Presidencia, salvo que con antelación a la reunión se documente su reemplazo *ad hoc* por alguna de las Vicepresidencias; situación en la que el/la reemplazante, en caso de empate, votará en dos (2) instancias: primero por sí y luego en reemplazo de y por la Presidencia. Asimismo, ante ausencia de algunas de las Vicepresidencias y en caso de empate, la Presidencia tendrá doble voto.

No tendrán validez las decisiones de Directorio que no cumplan con estas condiciones y procedimientos.

Artículo 53.- Atribuciones del Directorio. Sin perjuicio de otras que se reglamenten en el marco de esta Ley, el Directorio de la ADRyC tendrá las siguientes atribuciones generales:

- a) Velar por el derecho de los usuarios a tratamientos equitativos, dignos, no discriminatorios y ajustados al presente ordenamiento. Impulsar, consensuar con usuarios y prestatarios, y aprobar el manual o reglamento general de usuarios; con pautas de referencia relativas a sus derechos, obligaciones, a vías y procedimientos de trámites y reclamaciones de los usuarios, con sustento en los principios de adecuación territorial, celeridad, economía,

sencillez y eficacia procedimental.

- b) Elaborar y administrar el presupuesto anual de gastos y recursos, que remitirá al Poder Ejecutivo para su aprobación e inclusión en el proyecto de Ley de Presupuesto correspondiente a cada ejercicio anual. Elaborar anualmente la memoria y balance de la ADRyC.
- c) Establecer la estructura orgánica de acuerdo con la presente Ley y dictar las normas de procedimiento interno. Seleccionar, designar, incorporar y remover, según corresponda, a los Secretarios, Gerentes y personal de la Agencia. Fijar responsabilidades y remuneraciones.
- d) Informar anualmente al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo de la Provincia sobre la marcha de los servicios públicos de agua y saneamiento, sugiriendo las modificaciones e innovaciones que fuere menester introducir para la mejor prestación de los mismos, o su protección y la del interés público.
- e) Administrar y disponer los bienes que componen el patrimonio de la ADRyC. Dictar las reglamentaciones que regularán la gestión financiera, patrimonial y contable de la Agencia, y someterlas a aprobación del Poder Ejecutivo.
- f) Resolver reclamos, conflictos, diferendos y cuestiones en general que tuvieren relación directa con las prestaciones de los servicios regulados.
- g) Aplicar multas y/u otras sanciones que correspondieren. Celebrar arreglos, transacciones y acuerdos judiciales y extrajudiciales.
- h) Efectuar contrataciones. Otorgar y revocar poderes generales y especiales.
- i) Ejercer, a solicitud de las prestatarias y siempre que corresponda, las potestades ablatorias necesarias a la buena marcha, desarrollo y extensión o ampliación de los servicios. Formular y desarrollar iniciativas, brindar opinión, efectuar informes y emitir dictámenes, por sí o ante consultas que reciba, acerca políticas y estrategias sectoriales, planificación, proyectos y/o ejecución de medidas no estructurales y acciones estructurales.
- j) Desarrollar auditorías y demás técnicas de control de la observancia de pautas tarifarias y razonabilidad de costos operativos y de inversiones
- k) En general, dictar resoluciones y reglamentaciones y formular, establecer e implementar todas las medidas, acciones, actos administrativos y jurídicos propios de competencia de la ADRyC explícita o implícitamente otorgadas por esta Ley; pudiendo delegar el ejercicio instrumental de facultades de Directorio en las secretarías, áreas gerenciales u otros órganos internos.

Artículo 54.- Organización interna. La ADRyC tendrá un Directorio conforme esta Ley, y las Gerencias de Atributos de Calidad de Servicios, la de Infraestructura, Instalaciones y Procesos, la de Regímenes Tarifarios y Administración, otra de Información y Coordinación, y/o las que se establezcan cuando se apruebe su estructura orgánica.

Asistirán al Directorio una Secretaría Ejecutiva, una Secretaría Jurídico-Legal; así como también el Comité Técnico de Revisión y Actualización (CTRA) y un Consejo de Usuarios conforme establece la presente Ley.

Artículo 55.- Incompatibilidades y Remoción de Secretarios y Gerentes. No podrán ser titulares de Secretarías ni Gerencias las personas que incurran en alguna de las siguientes inhabilitaciones:

- a) Concursados e inhibidos.
- b) Condenados por delitos dolosos contra la administración pública.
- c) Deudores morosos de la provincia del Chaco, de sus entidades descentralizadas o entidades provinciales de servicios públicos.
- d) Proveedores habituales o contratistas de obras públicas relativas al agua y saneamiento, así como tampoco sus integrantes y funcionarios, en el caso de personas jurídicas.
- e) Quienes desempeñen cargos electivos nacionales, provinciales, municipales o comunales.
- f) Quienes incurran en inconducta pública de gravedad o reiterada;
- g) Quienes hayan sido propietarios o tenido vinculación laboral, contractual o comercial con prestatarias del derecho privado de servicios de agua y saneamiento que serán reguladas por la ADRyC, empresas integrantes del mismo grupo económico o controladas por éste, o contratistas o proveedores de tales empresas, o en general hayan desempeñado funciones en cualquiera de ellas, en algún período de los últimos tres (3) años.
- h) Quienes tengan litigios pendientes contra el Estado Provincial, el Gobierno de la Provincia del Chaco o sus Poderes, contra alguno de sus organismos o de alguna entidad estatal de servicio público, o contra cualquier prestataria de derecho público o privado de servicios de agua y saneamiento que será regulada y controlada por la ADRyC.
- i) Quienes incurran en incumplimiento grave de esta Ley y sus reglamentos, por acción u omisión en su desempeño ordinario
- j) Quienes adquieran incompatibilidad sobreviniente.

Los secretarios y gerentes, una vez finalizada las funciones en la ADRyC, no podrán formar parte de las empresas reguladas y controladas por la Agencia por un período de cinco (5) años. Podrán ser removidos por el Directorio en votación unánime.-

Artículo 56.- Personal. El personal de planta será seleccionado por el Directorio; y no excederá de una cantidad razonable para el cumplimiento de los objetivos, alcances jurisdiccional y territorial, competencias y funciones de la Agencia.

Artículo 57.- Presupuesto. El presupuesto anual de gastos y recursos de la ADRyC se integrará con los recursos que prevé la presente Ley; y su uso deberá ser equilibrado bajo los puntos de vista del endeudamiento y del excedente presupuestario anuales.

El saldo total de deuda por capital más intereses devengados, al final de cada año en ningún caso podrá exceder el veinticinco por ciento ($\leq 25\%$) del presupuesto asignado a dicho ejercicio anual. Los excedentes presupuestarios anuales incrementarán el presupuesto del ejercicio siguiente.

Artículo 58.- Recursos. Los recursos de LA ADRyC se obtendrán con los siguientes ingresos:

- a) Los ingresos provenientes de la tasa retributiva de servicios regulatorios y de control según la presente Ley establece.
- b) Los importes que abonen los prestadores en concepto de canon por el uso de cuerpos receptores de efluentes; y derechos especiales de concesiones, subconcesiones y licencias.
- c) El importe de las multas que aplique.
- d) Los aportes del fondo anual de sustentabilidad para la regulación y fiscalización de las prestaciones de servicios de agua y saneamiento en la provincia de conformidad a la presente Ley.
- e) Otros aportes que asigne la Ley de Presupuesto.
- f) Las donaciones, cesiones, transferencias, subsidios p legados que reciba bajo cualquier título o causa y sean aceptados.
- g) Los créditos que obtenga de organismos públicos, privados o mixtos.
- h) Los derechos de inspección y otros derechos y retribuciones similares que establezca por servicios especiales que en su caso preste la ADRyC.
- i) En general, fondos, bienes y otros recursos que le asignen las leyes y reglamentaciones en vigencia, otras especiales o que se dicten en el futuro.-

Artículo 59.- Tasa retributiva de servicios regulatorios y de fiscalización.

Créase la tasa retributiva de los servicios regulatorios y de control, equivalente al uno por ciento (1 %) de las dos terceras partes ($2/3$) del monto total de la facturación anual, libre de impuestos, de cada prestataria. Dicho monto, será calculado anualmente sobre la sumatoria de las facturaciones totales reales o presuntas correspondientes al año anterior al del pago, que la prestataria hará mensualmente por adelantado a la Agencia desde el comienzo de las tareas para la constitución y puesta en marcha de la misma.

Artículo 60.- Sustentabilidad. El Poder Ejecutivo Provincial considerará anualmente dentro del Presupuesto General de Gastos y Recursos un fondo de sustentabilidad para la regulación y control de servicios de agua y saneamiento en todo el territorio provincial; que se utilizará para los siguientes fines:

- a) Selección, instalación, operación, mantenimiento, reparación y reposiciones de instrumental y equipamiento para sistemas de control y monitoreo.
- b) Actividades y tareas de investigación operativa aplicada y mediciones de variables hidráulicas de las infraestructuras e instalaciones de los servicios

sanitarios, y calidad de aguas y efluentes de todos los suministros públicos de servicios sanitarios en la provincia, de gestión pública, privada o mixta.

- c) Asistencia para la formulación, gestión y ejecución de planes de inversión, metas y objetivos exigibles a las prestatarias de los servicios públicos.
- d) Capacitación técnica específica para profesionales y técnicos de la Agencia, entidades vinculadas, usuarios y prestadores de servicios sanitarios.
- e) Desarrollo, pruebas de gabinete y campo, instrumentación, contralor y ajustes de variables correspondientes a los atributos de calidad prestacional de los distintos servicios de agua y saneamiento conforme tipo, magnitud y localización de los mismos en todo el territorio de la provincia.
- f) Desarrollo de planes, proyectos y programas de actividades orientadas a la valoración de los servicios sanitarios en la sociedad, la importancia de los mismos para la salud humana y de su uso y mantenimiento adecuados
- g) Ejecución de Convenios.
- h) Funcionamiento de la entidad e instrumentación de controles permanentes en todo el territorio provincial
- i) Revisión, actualización y elaboración de normas y reglamentos.

Este fondo no podrá ser utilizado para la ejecución o rehabilitación de obras. En este rubro la ADRyC sólo podrá incluir como trabajos de obra el montaje de instrumentos de medición o control y actividades y tareas para investigación o mediciones de variables hidráulicas, de calidad de aguas y efluentes y demás variables relacionadas a la calidad del servicio de agua y saneamiento.-

CAPÍTULO 7: REGISTRO Y ARCHIVO TECNICO PROVINCIAL de AGUA y SANEAMIENTO

Artículo 61.- Creación. Créase el Registro y Archivo Técnico Provincial de Agua y Saneamiento (RATPAyS) que será llevado por la Agencia de Desarrollo, Regulación y Control de Servicios de Agua y Saneamiento en la provincia.

Todo prestador de servicios públicos de agua y saneamiento, sea de gestión pública, privada o mixta, y cualquiera fuese el medio, modalidad y magnitud de suministro del servicio, queda obligado a registrarse y suministrar al Registro y Archivo Técnico Provincial de Agua y Saneamiento las fichas técnicas, datos e informaciones pertinentes conforme reglamento y/o solicite la Agencia.

Artículo 62.- Finalidad del Archivo y Registro. El RATPAyS que la Agencia de Desarrollo, Regulación y Control (ADRYC) llevará debidamente actualizado, tendrá los siguientes fines:

- a) Registrar todos los datos e informaciones registrables de cada uno de los prestadores de servicios públicos de agua y saneamiento en la provincia.
- b) Registrar y archivar las fichas técnicas generales, particulares y de detalles técnicos y operativos de cada uno de tales servicios que, previamente

conformadas por profesional con la debida competencia y habilitación legal, informarán los prestadores a la ADRyC.

- c) Conservar las versiones de fichas técnicas entregadas por los prestatarios.
- d) Conservar en formato digital y en papel los documentos que conforman el archivo técnico.
- e) Conservar la documentación técnica informada por los prestadores, y poner a disposición de la prestataria pertinente los documentos correspondientes a la misma, facilitando el acceso a consulta de datos e información específica si así se solicitare.-

Artículo 63.- Provisión de datos e informaciones. Todo prestatario de servicios públicos de agua y saneamiento en la provincia del Chaco, sea de gestión pública, privada o mixta, y cualquiera fuese el medio, modalidad y magnitud de suministro del servicio, queda obligado a brindar los datos e informaciones de cada servicio y a entregar las fichas técnicas pertinentes, en virtud de las disposiciones del presente Título II, Capítulo 7, y conforme reglamento y/o solicite la ADRyC:

A tales efectos:

- a) Los prestadores deben llevar registros y fichas técnicas -generales, particulares y de detalles técnicos y operativos- de cada uno de los servicios sanitarios a su cargo.
- b) Incluso debe realizar muestreos y análisis de agua y efluentes cloacales, de acuerdo a las respectivas normas establecidas conforme esta Ley, y suministrar datos relevantes que informen la calidad del agua y efluente y/o copia de los protocolos de análisis según indique la ADRyC
- c) Estos datos y demás que conformen las fichas técnicas serán recopilados por la entidad prestataria de manera tal que posibiliten proveer la información necesaria y suficiente a efectos del control del servicio.
- d) Los registros, fichas técnicas y protocolos de laboratorio deben estar disponibles para las inspecciones que la ADRyC realice o mande a realizar.-

CAPÍTULO 8: COMITÉ TÉCNICO DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN.

Artículo 64.- Creación. Créase el Comité Técnico de Revisión y Actualización (CTRA) como unidad de apoyo técnico de la Agencia en la aplicación de esta Ley en general; y particularmente en la revisión y actualización de las Normas Provinciales de Calidad y Control del Agua para Consumo Humano, de las Normas Provinciales de Calidad de Efluentes Cloacales, de los Atributos Indicativos de Calidad de los Servicios, del Régimen Tarifario, y en general de normas, reglamentos y pautas aplicables pertinentes; con el objeto de que respondan a las necesidades y exigencias de la técnica moderna, conjugadas con la situación económico-financiera de las prestaciones sanitarias, en el contexto de las realidades territoriales de la Provincia.

Artículo 65.- Integración. El Comité Técnico de Revisión y Actualización estará integrado, como carga pública, por un/a representante de cada una de las entidades provinciales y académicas vinculadas al Sistema integrado Provincial de Desarrollo, Regulación y Control de Servicios de Agua y Saneamiento; así como también de otras personas jurídicas invitadas ad-hoc, en especial instituciones universitarias con sedes o delegaciones académicas en la provincia del Chaco, conforme las cuestiones en tratamiento.

Artículo 66.- Relación con la Comisión Nacional de Alimentos. Los agentes de la Administración Provincial del Agua y del Ministerio de Salud Pública que integren el CTRA y un representante de la Agencia tendrán a su cargo la representación técnica conjunta del Gobierno Provincial ante la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) toda vez que en ella se traten aspectos relativos a la calidad y/o control del agua para consumo humano en general, y en particular la distribuida por redes a tal efecto. La forma de designación, funciones, mandato y causales de remoción de los mismos serán establecidos por la Autoridad de Aplicación.

Artículo 67.- Incorporación y actualización de componentes y atributos de calidad. Las revisiones, actualizaciones y en general modificaciones al Significado de Conceptos Aplicables (Anexo A), a los Atributos Indicativos de Calidad de los Servicios (Anexo B), a las Normas Provinciales de Calidad y Control del Agua para Consumo Humano (Anexo C), a las Normas Provinciales de Calidad de Efluentes Cloacales (Anexo D), así como también al Régimen Tarifario (Anexo E), previo informe fundado del CTRA serán dispuestas por la Agencia de Desarrollo, Regulación y Control, como autoridad de aplicación de la presente normativa.

Artículo 68.- Funcionamiento. El CTRA se dará su propio régimen interno de funcionamiento, contemplando procedimientos simplificados de:

- a) Colaboración en la evaluación y resolución de los planes de adecuación e inversiones y propuestas de actualización que se presenten en aplicación de esta la presente Ley.
- b) Cooperación y articulación con agentes de las entidades que conforman el CTRA y con los prestatarios de servicios de agua y saneamiento en la provincia, en pos del efectivo control de los suministros de servicios sanitarios.
- c) Consultas con expertos en la gestión sanitaria, en aras del mejor cumplimiento de fines del CTRA en general, y a efectos de los incisos anteriores en particular.-

CAPÍTULO 9: CONSEJO DE USUARIOS

Artículo 69.- Propósito. El Directorio de la Agencia de Desarrollo, Regulación y Control de Servicios de Agua y Saneamiento podrá contar con el asesoramiento de un Consejo de Usuarios integrado por representantes de asociaciones de defensa de derechos de usuarios y consumidores, establecidas en El Chaco y que acrediten autorización prevista en la Ley n° 24.240, art 55, y su modificatoria Ley n° 26.361.

El Consejo de Usuarios se reunirá cuatrimestralmente, o a pedido de la ADRyC conforme necesidades, pudiendo celebrarse las reuniones de trabajo en la sede o subsedes zonales de la Agencia de Desarrollo, Regulación y Control.

Artículo 70.- Representación y registro. Cada asociación autorizada conforme la presente Ley podrá manifestar interés en integrar el Consejo proponiendo su representante *ad-honorem*.

La Agencia de Desarrollo, Regulación y Control llevará un registro detallado de las Asociaciones Miembros del Consejo de Usuarios (AMCU) efectivamente incorporadas, sus representantes y demás informaciones según se reglamente.

Artículo 71.- Roles. El Consejo de Usuarios desempeñará roles consultivos en los siguientes asuntos:

- a) Promoción del uso racional del agua y de la protección intradomiciliaria de la misma.
- b) Conocimiento global de las obras de infraestructura existentes, proyectadas y previstas.
- c) Evaluación de mejoras y ampliaciones de servicios, en la atención de los usuarios de las tales prestaciones y protección de sus derechos.
- d) Criterios y pautas de tarifas sociales.
- e) Aviso o alerta de casos de fugas o pérdidas de agua o efluentes en los respectivos sistemas sanitarios.
- f) Apoyos en el control de la contaminación de fuentes de agua para consumo.
- g) Denuncia de robos de agua o desvíos no autorizados en conducciones de agua o efluentes.
- h) Mediciones de caudales y presiones, y control de funcionamiento de medidores, en conjunto con la prestataria correspondiente.
- i) Promoción de tarifas equitativas.
- j) Reuniones evaluativas en materia de desarrollo servicios sanitarios, pudiendo incluso informar y solicitar informes al respecto.
- k) Evaluaciones comparativas específicas de prestatarias en la provincias o entre alguna de éstas y similares en el país o exterior

- l) Conocimiento de balances globales de prestatarias específicas.
- m) Acompañamiento a la Agencia de Desarrollo, Regulación y Control de Servicios de Agua y Saneamiento de la provincia del Chaco en la promoción y desarrollo de actividades orientadas a valorar los servicios de agua y saneamiento para la salud humana; y en distintas instancias de mediación e intermediación y audiencias públicas específicas.
- n) Asesoramiento en otros temas específicos de carácter sanitario sobre los que el Directorio requiera su colaboración.-

CAPÍTULO 10: RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 72.- Finalidad y alcances. El régimen económico tiene por objeto establecer las normas de tratamiento del sistema de tarifas, precios, cargos y facturación de los servicios públicos de agua y saneamiento, alcanzando tanto a prestadores como a los usuarios categorizados de conformidad al Anexo E (Régimen tarifario). Regirá para todas las prestatarias exceptuando las que tengan convenios especiales vigentes a la fecha de sanción de esta Ley, en tanto los mismos subsistan.

Las tarifas de los servicios públicos de agua y saneamiento regulados por la presente Ley integran el ordenamiento jurídico de la provincia del Chaco en su calidad de normas reglamentarias y, cuando correspondiere, de naturaleza contractual.

Toda persona física o jurídica de derecho privado o público que actúe como prestataria de un servicio público de agua y saneamiento tiene la obligación de aportar los datos, informaciones y documentaciones que le fueren solicitados por la ADRyC, a los fines de verificaciones y/o adecuaciones en orden al presente régimen.-

Artículo 73.- Principios generales. Las tarifas que apruebe la Agencia de Desarrollo, Regulación y Control de Servicios de Agua y Saneamiento armonizarán en su aplicación los siguientes principios generales:

- a) Deberá tenderse a homogeneizar la metodología de cálculo tarifario y a la utilización de criterios y coeficientes que reflejen realidades socioeconómicas que así lo ameriten.
- b) Toda persona física o jurídica de derecho privado o público que actúe como prestataria de un servicio público de agua y saneamiento tendrá derecho a la facturación y cobro de todas las tarifas, precios y cargos derivadas de la prestación de cada servicio que preste, de conformidad a esta Ley, sus reglamentaciones y normas aplicables concordantes.
- c) Las tarifas deberán posibilitar al/a prestatario/a obtener los ingresos necesarios para cubrir todos sus costos operativos razonables, los cánones, impuestos y tasas, la depreciación de los bienes efectivamente utilizados en la producción y prestación del servicio, y -según corresponda- un fondo para

inversión en infraestructura; así como también cubrir razonables utilidades en los casos pertinentes. Los cargos de infraestructura, cargos por disponibilidad del servicio en redes y cargos de conexión deben ser pequeños en las fórmulas tarifarias.

- d) Los precios deberán reflejar el costo económico de una prestación eficiente del servicio, incluyendo los costos de operación, de mantenimiento, de proyectos, de realización de los planes de mejoras, desarrollo y expansión, en tanto corresponda, y el beneficio del/la prestatario/a según correspondiere. Se procurará que parte del beneficio por una mayor eficiencia productiva que logren los prestadores a lo largo del tiempo se refleje en inversiones y en reducciones de tarifas; el beneficio de las personas jurídicas de derecho público no será de usufructo sino considerado como ingreso para gastos e inversiones en y para el servicio que prestan.
- e) Las tarifas aprobadas por la Agencia de Desarrollo, Regulación y Control serán considerados máximos tarifarios. Los prestatarios podrán disminuir el componente de rentabilidad o beneficio contenido en ellas, sin que en ningún caso se disminuya el componente destinado a cubrir los costos razonables del servicio.
- f) Cualquiera fuese la prestataria, la misma tiene la responsabilidad de prestación del servicio con equilibrio presupuestario ente ingresos y egresos.
- g) El usuario tendrá derecho a la prestación del servicio, al conocimiento de lo que abona por cada concepto facturado y ser parte cuando se altera la base de cálculos, ello conforme la normativa vigente y resoluciones de la Agencia. Las prestatarias pondrán a disposición de los usuarios los cuadros tarifarios debidamente aprobados por la ADRyC.
- h) La estructura tarifaria contemplará distintos grupos de usuarios del servicio prestado, clasificados con arreglo a criterios objetivos; éstos y los grupos resultantes deberán ser aprobados por la Agencia. Se tenderá a la aplicación de tarifas iguales dentro del mismo grupo de usuarios, no pudiendo los prestatarios establecer discriminaciones de tarifas dentro de cada grupo sin la previa autorización de la ADRyC.
- i) Sin perjuicio de ello, las tarifas atenderán objetivos sanitarios y sociales vinculados directamente con la prestación del servicio de agua y saneamiento, tratando de evitar el predominio de subsidios cruzados. Se permitirá sin embargo que los valores tarifarios aplicados a algunos usuarios equilibren el costo económico de la prestación a otros grupos de usuarios en distinta situación socioeconómica, en conjugación de lo precisado en otros principios generales contemplados en este artículo.
- j) La prestataria podrá establecer tarifas diferenciales mayores, previa solicitud fundada a ADRyC y autorización de ésta, en los casos en que técnicamente se justifique por las dificultades que pudiera presentar algún servicio en particular. La Agencia podrá autorizar tales tarifas sólo cuando su aplicación

no pongan en riesgo objetivos a los que aluden otros principios generales contemplados en este artículo

- k) En las facturaciones se discriminará los diversos conceptos básicos que integran la tarifa.
- l) Se propenderá a un uso racional y eficiente del servicio brindado y de los recursos involucrados para su prestación.
- m) La operación de los servicios se orientará al equilibrio entre la oferta y la demanda de servicio sanitario. Los Prestadores no podrán restringir voluntariamente la oferta total de servicio; ello sin perjuicio reducir o interrumpir el suministro en los casos previstos de usuarios infractores o incumplidores de sus obligaciones conforme esta Ley y sus reglamentos.

Artículo 74.- Derechos económicos de las entidades prestatarias. Las prestatarias de servicios de agua y saneamiento podrán cobrar a los usuarios los siguientes conceptos que integran el sistema tarifario cuya apertura y cargos conforman el Anexo E:

- a) **Fijo de Mantenimiento y Disponibilidad de Redes e Infraestructura Servicios o Fijo de Radio Servido.** Es la cantidad fija que periódicamente deben abonar los usuarios por el mantenimiento y disponibilidad del suministro o servicio de que gozan, tanto de aguas como de cloacas, independientemente de que hagan uso o no de ellos; la que estará destinada a cubrir los costos fijos implicados en el servicio. Su valor podrá ser expresado por la prestataria en equivalencias de volumen, caudal u otros.
- b) **Cargo Variable de Consumo Medido.** Es la cantidad que deben abonar los usuarios en forma periódica, en función del consumo realizado; la que estará destinada a cubrir los costos variables de la explotación y mantenimiento del sistema de prestación. Podrá ser empleado también como un medio para regular el consumo de una población en función de la disponibilidad del recurso, propendiendo al uso racional del agua; caso en el cual el cargo variable por unidad de agua consumida podrá incrementarse en función del consumo, mediante la aplicación de una pauta de incremento predefinida, con aprobación de la Agencia .

El cargo variable de consumo medido es aplicable directamente a los casos de suministro de agua con medición y/o registro de consumo.

Para su aplicación al servicio de desagüe cloacal se lo calculará indirectamente, tomando como base un porcentaje del consumo de agua medido. Cuando el servicio agua y el de saneamiento sean prestados por entidades diferentes, serán también de aplicación estos conceptos tarifarios, para lo cual se deberán establecer acuerdos entre ambas prestatarias a fin de que la del servicio de saneamiento pueda contar con los registros periódicos de consumo de agua; o bien la prestataria de saneamiento determinará una forma de asignación de un cálculo presunto.

- c) Cargo Variable de Consumo No Medido.** Es la cantidad que deben abonar los usuarios en forma periódica mediante la aplicación, a los casos de suministro de agua sin medición ni registro de consumos, de una cuota fija por usuario en función de las categorías en vigencia y criterios de cálculo por el cual se establecen y asignan al usuario consumos presuntos. Tales criterios de cálculo deberán ser informados a la ADRyC por cada prestataria. El cargo variable de consumo no medido podrá ser empleado también como un medio para incentivar la colocación de medidores y el mantenimiento de los mismos en adecuadas condiciones de funcionamiento.
- Para su aplicación al servicio de desagüe cloacal se lo calculará indirectamente, tomando como base un porcentaje del parámetro o componente fijo de la tarifa aplicable por consumo no medido de agua; o bien se adicionará al componente de “tarifa de tasa fija o consumo presunto” de agua el costo de un determinado volumen, valuado según cargos variables establecidos para el régimen medido y determinado según la categorización vigente de los usuarios. Cuando el servicio agua y el de saneamiento sean prestados por entidades diferentes, serán también de aplicación estos conceptos tarifarios, para lo cual se deberán establecer acuerdos entre ambas prestatarias a fin de que la del servicio de saneamiento pueda contar con los registros periódicos de consumo de agua; o bien la prestataria de saneamiento determinará una forma de asignación de un cálculo presunto.
- d) Cargo Variable exclusivo de agua a granel.** Es la cantidad que deben abonar las prestatarias de servicios de agua en su calidad de clientes de otros prestatarios a quienes los primeros adquieren agua a transportar por medios móviles o bien conducida por acueductos hasta sus instalaciones.
- e) Cargo Variable de agua transportada suministrada a granel.** Es la cantidad que deben abonar los usuarios finales en función del consumo realizado de agua que reciben a granel mediante cisternas o tanques móviles o medios similares.
- f) Cargo Variable de agua en bloque para retiro.** Es la cantidad que deben abonar los usuarios finales en función de bloques de volumen de agua suministrada exclusivamente para consumo humano (bebida y preparación de alimentos, con o sin cocción) en la modalidad “agua para retiro” que la presente Ley define en su Anexo A;
- g) Cargo Fijo de sólo Desagüe Cloacal.** Cuando el inmueble sólo disponga de servicios de redes de colectoras cloacales de una determinada prestataria (y no de redes de agua) se aplicarán tarifas de servicio de sólo desagüe cloacal, según Anexo E.
- h) Cargo variable de Efluentes a Granel.** Es la cantidad que deberán abonar los usuarios a las prestatarias de servicios saneamiento en función del volumen de efluentes a granel para su tratamiento sanitario, sin intervención de redes colectoras.

- i) **Recargos especiales.** Sin perjuicio de los conceptos tarifarios establecidos en el presente artículo, en la prestación del servicio sanitario a un sector o a determinados usuarios, que -por motivos de explotación de instalaciones diferentes a la del normal abastecimiento, tales como instalaciones para modificaciones de presiones o caudales, o estaciones de bombeo u otros- generen un costo adicional, la ADRyC podrá evaluar la autorización de un recargo para que los usuarios involucrados asuman, aun en forma parcial y carácter permanente o transitorio, el mayor costo derivado del tratamiento diferenciado. En el caso especial de alimentación de energía al sistema de acueductos el recargo podrá comprender a los usuarios de dicho sistema; e incluso, como carga solidaria, a los usuarios de la prestataria responsable del funcionamiento y mantenimiento del sistema de acueductos en la provincia del Chaco.
- j) **Tarifas especiales.** El régimen tarifario admitirá la incorporación de tarifas especiales necesarias para la provisión de agua para la construcción, natatorios, riego de espacios públicos y lugares de esparcimiento en general; así como también para usuarios circunstanciales que desarrollan actividades transitorias o estacionales o por períodos precisos..
- k) **Cargo por Conexión, de Desconexiones-Reconexiones, y de Renovación.** Las conexiones, desconexiones y reconexiones de agua y de cloacas, así como también la instalación de medidores, serán siempre realizadas por personal técnico debidamente autorizado o contratado al efecto por la prestataria.

Es obligatoria la instalación de medidores en toda nueva conexión de agua; así como también en cada reconexión consecuente de desconexión previa que haya debido hacerse en razón de alguna obligación incumplida por el usuario u otra causa imputable al mismo. Los medidores serán homologados, y deberán ser verificados en su funcionamiento por la prestataria por sí o terceros; su provisión y/o su instalación podrán estar a cargo del usuario y/o la prestataria, en cualquier caso a conformidad de ésta.

- l) **Servicios Específicos.** En casos en que los usuarios requieran al prestador algún servicio individualizado, diferente a los que la misma está naturalmente obligada en función de la presente Ley, el prestatario podrá facturar y cobrar al usuario los valores adicionales resultantes de dichos servicios.
- m) **Cargo de Amortización y de Inversión.** Se entenderá por tal al monto que se establecido para hacer frente a las inversiones en infraestructura de obra básica y/o complementaria de mejoramiento, reposición o ampliación, según corresponda. Este ingreso se aplicará exclusiva y específicamente a la finalidad prevista, y contablemente recibirá un tratamiento diferente a los conceptos de la explotación.
- n) **Obras complementarias.** La prestataria podrá facturar y cobrar a los beneficiarios, un cargo especial por obras en base al costo total o parcial de trabajos de expansión y/o rehabilitación de redes domiciliarias, ajenos

a los programados y formalmente comprometidos en documentos oficiales habilitantes a cargo del Prestador, y/o los Planes de Inversión aprobados por la Agencia y financiados a través del Cargo de Amortización y de Inversión contemplado en e anterior inciso m). La ADRyC establecerá en cada caso, con base en propuesta de la prestataria, el monto del cargo especial a los usuarios, la cantidad de cuotas y el interés por financiamiento que corresponda.

- o) Inspección de medidor.** El Prestador está facultado para cobrar el cargo por inspección cuando, a solicitud del usuario realice una inspección del punto de medición, controlando el correcto funcionamiento del medidor. Si de ello resultare el mal funcionamiento del mismo la prestataria no deberá cobrar el referido cargo, asumiendo ella misma los costos de esta inspección.
- p) Desconexión por inhabilitación.** Cuando un inmueble ubicado en el área servida fuese demolido o se hallare deshabitado y se haya declarado inhabitable por la autoridad provincial o municipal que corresponda, el usuario deberá solicitar la desconexión del servicio y la recategorización del inmueble. Con su solicitud el usuario deberá pagar el cargo de desconexión pertinente.
- q) Impuestos, Aranceles, Sellados, Tasas.** Los gravámenes o tributos que establece la legislación impositiva en vigencia y que afecten al servicio.
- r) Cargos especiales de notificación y franqueo.** Todo prestador está facultado a cobrar al usuario las notificaciones de deuda, los avisos de limitación y reducción en el servicio por mora, los preavisos y avisos de acción judicial; y toda otra comunicación asimilable a estos conceptos.
- s) Multas, intereses, indemnizaciones u otros derechos** que ante circunstancias especiales o extraordinarias pudieran corresponder, de acuerdo con las normas y reglas en vigencia, sean generales o específicas de cada prestación.
- t) Cargo de incorporación.** En caso que el prestatario incorpore a su servicio, algún centro urbano o conglomerado rural, o áreas parciales de los mismos, y que anteriormente carecían de servicio o lo recibían de otros prestadores, aquel tendrá derecho a percibir de los usuarios, o en su defecto de la Municipalidad correspondiente o de la Provincia, un cargo de incorporación para compensar las obras básicas adicionales que demande la ampliación de las prestaciones de servicios sanitarios, siempre que ello no genere duplicidad de cargos en orden a los restantes incisos del presente artículo. Los valores del cargo de incorporación serán aprobados por la ADRyC en base a la proporción de los costos que dicha incorporación genere a la prestataria, y que se estimen como no recuperables a través del régimen tarifario aplicable en una proyección de recupero, con actualizaciones, de hasta treinta (30) años o, si fuere el caso, durante la vigencia de la concesión.

Artículo 75.- Sistemas Tarifarios. Se entenderá por Sistema Tarifario la modalidad que empleen las prestatarias, según sistema de consumo medido y/o no medido, para la aplicación de los conceptos tarifarios definidos en esta Ley como derechos económicos de las entidades prestatarias; los que constituyen derechos económicos vinculados con la prestación en general de los servicios de agua y saneamiento, en orden a la consecución y mantenimiento del equilibrio económico y financiero de los mismos y sus entidades responsables.

En el territorio de la provincia del Chaco se podrán aplicar los siguientes sistemas tarifarios:

- a) **Sistema de Consumo Medido.** Es de aplicación a Usuarios con medidor de agua, registrado por la prestataria, instalado, en funcionamiento y en condiciones de acceder y dar lectura al mismo; y se basa en la determinación de los consumos de cada usuario mediante la lectura periódica del medidor. Sobre la base del volumen de agua medido se calculará la componente variable de la tarifa, indicada en el anterior Art 74, inciso b.-
- b) **Sistema de Consumo no Medido.** El sistema tarifario de consumo no medido o de cuota fija, será aplicable a aquellos usuarios que no cuenten con el medidor de agua instalado, en funcionamiento y en condiciones de acceder y dar lectura al mismo; casos en los cuales el cargo variable pasará a ser un parámetro o componente fijo de la tarifa sin medición, que se determinará para cada usuario en función de las categorías en vigencia. Los Usuarios de cuota fija pasarán inmediata e indefectiblemente al sistema tarifario de consumo medido a partir de momento en que cuenten con medidor de agua registrado por la prestataria, instalado, en funcionamiento y en condiciones de acceder y dar lectura al mismo. El cargo rector es el definido en el anterior Art 74, inciso c).

Artículo 76.- Regulación tarifaria y cargas tributarias. La ADRyC ejercerá la regulación tarifaria incluyendo en su análisis la evaluación de planes de mejoras, desarrollo y expansión, considerando el cumplimiento de los mismos, así como también de las condiciones de eficiencia que se propongan en forma particular.

Los regímenes tarifarios considerarán, en lo pertinente, la incidencia efectiva de todo tributo o modificación, sustitución o reemplazo de los mismos o de sus alícuotas sobre la tarifa, conforme al Anexo E.-

Artículo 77.- Modificaciones. El régimen tarifario y los cuadros de precios y tarifas podrán ser revisados y modificados periódicamente conforme lo determine la Agencia en el marco de esta Ley y normas y reglamentación concordantes que resulten de aplicación. En el caso de concesiones, subconcesiones y licencias, la metodología y frecuencia para revisiones ordinarias de las tarifas deberán ser contempladas en los pliegos particulares y en los instrumentos de contratación y otorgamiento de los servicios sanitarios.

Sin perjuicio de ello, cuando en condiciones de eficiencia hubiere un conflicto en relación a los principios generales establecidos en el presente Capítulo de Régimen Económico, o cuando se proponga otro régimen que permita lograr incrementos de eficiencia y signifique una mejor aplicación de tales principios, a requerimiento de la entidad prestataria o por iniciativa de la ADRyC se podrán efectuar revisiones extraordinarias con aplicación de lo establecido en esta Ley, y normas y reglamentación concordantes que resulten aplicables.

Artículo 78.- Solicitud fundada. Toda prestataria podrá solicitar revisiones extraordinarias de tarifas, cargos o servicios, fundándose en razones objetivas y justificadas, según se contempla en los principios generales del presente Régimen Económico, relacionadas con el cargo de amortización y de inversión u otros conceptos pertinentes en aplicación de los derechos económicos de las entidades prestatarias. En tal caso la ADRyC convocará a una audiencia pública en la que la entidad prestataria explicará en detalle y fundamentará su petición; luego de lo cual la Agencia emitirá decisión dentro de los treinta (30) días hábiles administrativos posteriores a la celebración de la audiencia.

En caso de aprobarse, las nuevas tarifas resultantes de la aplicación de este artículo se aplicarán a partir de los siguientes dos (2) meses posteriores a la fecha de dicha la decisión.

En estas revisiones se considerará la real incidencia, en los costos, de aquellos elementos que hayan variado por encima de determinados niveles porcentuales conforme se determine, por causas ajenas al prestatario.

En ningún caso la revisión será un medio para compensar resultados derivados del riesgo empresarial, ni para convalidar ineficiencias en la prestación.-

Artículo 79.- Presunciones de error o pérdida. Cuando en un Sistema de Consumo Medido la prestataria facture en un período consumos que exceden en un cincuenta por ciento (50%) el promedio de los consumos correspondientes al mismo período de los dos (2) años anteriores, se podrá presumir que el gasto de agua ha sido efectivamente realizado o, en su defecto, la posible existencia de:

- a)** Pérdidas en la conexión desde el medidor a la red domiciliaria interna, en el punto de acople entre ésta y el medidor (caja de conexión en vereda); y/o
- b)** Fallas o roturas del medidor o modificaciones u otro tipo de intervenciones en el mismo no autorizadas por la prestataria en forma expresa; y/o
- c)** Pérdida en red domiciliaria interna, no visible, involuntaria y no recurrente; o
- d)** Errores en lecturas de medidores o en procedimientos de carga de datos, cálculos y/o perfeccionamiento de la factura;

Es obligación del Usuario verificar y dar solución a las situaciones planteadas en incisos **a)**, **b)** y **c)**. Mediando confirmación de tales presunciones y sólo previa solución -por parte del Usuario- del problema y causas que le hayan originado,

la Prestataria podrá, a su exclusivo criterio y en el marco de sus reglas internas, considerar la refacturación del período en cuestión según el promedio de los consumos correspondientes al mismo período de los dos (2) años anteriores; o bien ejercer su derecho a exigir el pago del monto originalmente facturado, a valores actualizados, en uno (1) uno o más pagos.

Es obligación de la Prestataria verificar y dar solución a la situación planteada en el inciso **d)** y refacturar el período en cuestión según el promedio de los consumos correspondientes al mismo período de los dos (2) años anteriores. Si en orden al supuesto del inciso **d)** el usuario hubiere realizado el pago del período facturado en exceso, el monto pagado de más le será reconocido por la prestataria a valores actualizados, en la facturación de uno o más períodos sucesivos según haya sido la cuantía del exceso.

Artículo 80.- Transferencia o modificación dominial. Incorporación al régimen de propiedad horizontal. Constitución de derechos reales. No se autorizarán transferencias o modificaciones de dominio del inmueble, incorporaciones al régimen de propiedad horizontal ni constitución de derechos reales sobre ellos, sin que se acredite por los interesados estar al día en el pago de los servicios, recargos, intereses, multas y cuotas vencidas o cualquier otra deuda que por ese motivo mantengan con el prestador del correspondiente servicio público de agua y saneamiento.

Artículo 81.- Obligación de las Escribanías Públicas y de las Prestatarias. A todos los efectos del artículo precedente se dará cumplimiento a las siguientes providencias:

- a)** Previo a tramitarse cualquier transferencia dominial, incorporación al régimen de propiedad horizontal o constitución de derechos reales, es obligación de las Escribanías Públicas solicitar a la pertinente prestataria de servicio público de agua y saneamiento los certificados de deuda del/os inmueble/s involucrado/s, precisando el porcentual del dominio de la/s unidad/es que correspondiere/n.
- b)** Ante la solicitud de escribanías públicas, con motivo de transferencias de dominio, la incorporación de inmuebles al régimen de propiedad horizontal o constitución de derechos reales, la prestataria está obligada a expedir un comprobante o certificado por cada inmueble involucrado en el que conste la deuda que, por cualquier concepto relacionado con el presente régimen, reconozca dicho inmueble para con la prestataria del servicio público de agua y saneamiento.
- c)** Si los comprobantes o certificados mencionados supra, debidamente emitidos por la prestataria, no acompañaren los documentos escriturales, la Inspección de Escrituras Públicas retendrá los testimonios de escrituras

inscriptas hasta que se acredite el pago de las deudas al correspondiente prestatario.

- d) La ADRyC controlará el cumplimiento de las funciones asignadas en este artículo a los prestadores; y podrá dictar las reglamentaciones pertinentes y celebrar los acuerdos que estime convenientes en orden al mismo.-

CAPÍTULO 11: OBLIGACIONES DE COBRO Y DE PAGO DEL SERVICIO

Artículo 82.- Responsabilidad de la prestataria y obligación del usuario.

Todo prestador de servicios de agua y saneamiento es el encargado responsable del cobro del suministro pertinente. A tal fin las facturas, liquidaciones o certificados de deuda que emita por el servicio que preste, de acuerdo con el régimen tarifario, tendrán fuerza ejecutiva; y su cobro judicial se efectuará cuando previamente la entidad prestataria haya acreditado haber dado cumplimiento, en lo pertinente, al procedimiento previsto al respecto en este Capítulo con resultado negativo, debiendo además comunicar esta circunstancia a la Agencia con diez (10) días de anticipación a la promoción de la acción judicial.

A este efecto las facturas, liquidaciones o certificados de deuda que la prestataria emita conformarán Título Ejecutivo en los términos de la legislación provincial.

Artículo 83.- Inmuebles obligados al pago de servicios sanitarios. Los inmuebles sin construcciones con disponibilidad de servicio, se encuentren o no conectados a redes de agua y /o cloacas están sujetos al pago de tarifas del servicio público de agua y/o saneamiento, en lo pertinente a tal situación. Todos los inmuebles que tengan disponibilidad de servicio sanitario, con construcciones para el resguardo de personas, animales o cosas, ocupados o desocupados, que reciban o estén en condiciones de recibir la prestación, están sujetos al pago de tarifas del servicio público de agua y/o saneamiento según los derechos económicos de las entidades prestatarias y sistemas tarifarios que esta Ley estipula.

Todo inmueble al que por cualquier medio y modalidad se le suministren servicios de agua en bloque o a granel, y/o servicios de recepción y tratamiento de efluentes en bloque está obligado al pago de tales servicios.

Artículo 84.- Personas obligadas al pago de servicios sanitarios. En cualquiera de los casos están indistinta y solidariamente obligados al pago de los servicios de agua y saneamiento las siguientes personas físicas y jurídicas de derecho público o privado:

- a) El propietario o consorcio de propietarios del inmueble, por toda la deuda que éste registre.
- b) El poseedor, tenedor u ocupante del inmueble servido, por el periodo de la posesión, tenencia u ocupación.

- c) Toda usuario, sea persona física o jurídica de derecho público o privado, al que por cualquier medio y modalidad se le suministre servicios de agua en bloque o a granel y/o servicios de recepción y tratamiento de efluentes en bloque.

Artículo 85.- Inmuebles de propiedad horizontal. Las referencias a inmueble en la presente Ley comprenden también las unidades funcionales de inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal, siendo de aplicación las siguientes reglas:

- a) Hasta la constitución del Consorcio de Propietarios y subdivisión en unidades funcionales, responderán en forma solidaria el propietario del inmueble, poseedor, tenedor u ocupante por cualquier título, como asimismo el propietario y/o titular del emprendimiento.
- b) A partir de la afectación del inmueble al régimen de propiedad horizontal, responderán los propietarios de las unidades funcionales por el servicio prestado a las mismas, y por el porcentaje que les corresponda a dichas unidades en el servicio de los espacios comunes.
- c) Cuando el Consorcio de Propietarios hubiere optado por la alternativa de facturación medida global al inmueble, o cuando hubiere solicitado un servicio de uso exclusivo para las partes comunes, será responsable el Consorcio de Propietarios por toda la deuda que éste registre.
- d) Las estipulaciones que pudieren existir entre propietarios, poseedores, tenedores, ocupantes entre sí y/o con el consorcio de propietarios, respecto de las obligaciones del pago del servicio de agua y/o saneamiento no le son oponibles al/a prestador/a.

Artículo 86.- Unidades complementarias del régimen de propiedad horizontal. Se considerarán unidades complementarias aquellas que integren una unidad funcional con un inmueble destinado a vivienda o comercio en el mismo edificio.

No estarán sujetas al pago del servicio de agua y/o saneamiento las cocheras, bauleras u otras unidades complementarias de los inmuebles sometidos, en todos los casos, al régimen de propiedad horizontal y que se destinaren a la guarda de vehículos y otros bienes muebles, siempre y cuando carezcan de instalaciones sanitarias de uso exclusivo.-

Artículo 87.- Pago del servicio sanitario por organismos oficiales y entidades universitarias, de culto y sociales. Al igual que la generalidad de los usuarios, los organismos oficiales, las entidades universitarias públicas y privadas, así como también las entidades de culto y sociales cualquiera sea la forma jurídica, están obligados al pago de las tarifas y tasas correspondientes a sus respectivos servicios de agua y saneamiento.

En el caso de deudas, cualquiera de los Poderes del Gobierno Provincial podrá ordenar, sugerir o solicitar la suspensión de la facultad de la entidad prestataria para cortar el suministro del servicio; teniendo en tal caso el Poder Provincial que así lo disponga, sugiera o solicite la obligación de pagar las deudas involucradas con más sus intereses, o compensar por su totalidad al prestatario acreedor.

Artículo 88.- Responsabilidad de pago de exenciones, subvenciones o subsidios. Registros. Dispónese la derogación de todas las exenciones al pago, subvenciones, subsidios y en general rebajas de las tarifas dispuestas con anterioridad a esta Ley en beneficio de algún tipo de usuario o usuarios, sean éstas personas físicas o jurídicas de derecho privado o público.

A partir de la sanción de la presente Ley, y sin perjuicio del suministro de agua sin cargo a los servicios de cuarteles e hidrantes de bomberos, en caso de que se establezcan otras exenciones, subvenciones o subsidios explícitos, la correspondiente obligación de pago de los servicios de agua y cloacas eximidos, subvencionados o subsidiados será asumida y satisfecha por la persona jurídica pública que disponga la exención, subvención o subsidio. **Por defecto en el acto otorgante, la obligación de pago quedará a cargo del Tesoro Provincial.**

Toda exención, subvención o subsidio explícito será registrada en un padrón específico que llevarán en común la prestataria involucrada y la Agencia de Desarrollo, Regulación y Control de Servicios de Agua y Saneamiento.

Artículo 89.- Subsistencia de obligación de pago. En todas las facturas la prestataria tiene la obligación de informar la fecha de vencimiento subsiguiente y la cantidad de facturas o comprobantes adeudados a la fecha, tanto en gestión comercial como en gestión judicial

En caso de no ser recibida por el usuario la facturación emitida por la entidad prestataria, subsiste la obligación del primero de pagar la misma en tiempo y forma, toda vez que las fechas u oportunidad de pago sean informadas por el prestador con suficiente antelación por medios idóneos, o cuando la última factura recibida indique claramente la fecha de vencimiento subsiguiente.

Artículo 90.- Reducción del servicio. Cuando se verifiquen atrasos consecutivos de tres (3) períodos en el pago del servicio la prestataria del mismo intimará al deudor, por medio fehaciente en domicilios registrados en la prestataria, al pago de lo adeudado en el término de quince (15) días calendario bajo apercibimiento de ejecución judicial y reducción del servicio. De resultar infructuosa la intimación, queda facultada la prestataria a proceder a la reducción del servicio e inicio de reclamo judicial por incumplimiento de pago por parte del usuario, debiendo comunicar previamente ambas circunstancias a la ADRyC.

Idéntico procedimiento se realizará cuando el usuario adeudare una factura por más de ciento ochenta (180) días calendario desde la fecha de su vencimiento.

Ninguna reducción de servicio en aplicación de este artículo elimina la obligación de pago del importe inicial con más los intereses y recargos que correspondan.

Cualquier acuerdo de pago entre el prestador y el usuario sobre las facturas adeudadas obliga a aquel a la normalización del servicio en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas de acreditación del pago correspondiente según lo acordado. Toda acreditación de pago será previamente verificada por la prestataria en sus registros. Cualquier incumplimiento del acuerdo de pago habilitará a la prestataria al corte del servicio según lo dispuesto en la presente Ley.

En ningún caso operará la reducción del servicio por falta de pago los servicios sanitarios suministrados a hospitales públicos o en general a centros de salud pública, hogares de día, residencias geriátricas o similares de derecho público, ni a establecimientos educativos públicos de niveles inicial y medio; sin perjuicio de la obligación del Poder Ejecutivo Provincial de pagar las deudas involucradas con más sus intereses o compensar por ello al prestatario acreedor.-

Artículo 91.- Corte del servicio.

La prestataria tendrá la facultad de proceder al corte de servicios en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- a) Cuando se detectaren descargas o vertidos de sustancias o desagües a las colectoras cloacales, que estuvieren prohibidos conforme la presente Ley; cuando se detectare la sustracción, violentación, modificación o alteración en las cañerías, equipamientos, medidores y/u otras instalaciones del servicio público de agua o de saneamiento; y toda vez que se detectaren conexiones clandestinas o tomas, conexiones, captaciones, desvíos, derivaciones o cargas de agua desde las instalaciones del servicio de agua y/o saneamiento a cargo de la prestataria, sin contar con la expresa autorización de ésta.

En cualquiera de los casos deberá la prestataria realizar denuncia policial previa y notificación a la Autoridad de Aplicación. El corte procederá sin perjuicio de la aplicación de multas previstas en el régimen sancionatorio en vigencia; y la prestataria restituirá el servicio una vez subsanada la irregularidad, pagadas las multas aplicadas y efectuadas las verificaciones técnicas pertinentes con resultados satisfactorios a juicio de la prestataria.

- b) Cuando en el curso de un año corrido se verificaren atrasos de seis (6) períodos en el pago del servicio, o la reiteración de atrasos consecutivos de tres (3) períodos en el pago de los mismos. Previamente la entidad prestataria intimará al deudor, por medio fehaciente en domicilios registrados en la prestataria, al pago de lo adeudado en el término de quince (15) días calendario bajo apercibimiento de ejecución judicial y corte del servicio; de resultar infructuosa la intimación, queda facultada la prestataria a proceder al corte del servicio e inicio de reclamo judicial por incumplimiento de pago por parte del usuario, debiendo comunicar previamente ambas

circunstancias a la ADRyC. Ningún corte de servicio en aplicación de este inciso elimina la obligación de pago del importe inicial con más los intereses y recargos que correspondan.

Cualquier acuerdo de pago entre el prestador y el usuario sobre las facturas adeudadas obliga a aquel a la reconexión del servicio en el plazo de setenta y dos (72) horas de acreditación del pago correspondiente según lo acordado; la acreditación será previamente verificada por la prestataria en sus registros. Cualquier incumplimiento del acuerdo de pago habilitará a la prestataria al corte del servicio según lo dispuesto en el presente dispositivo legal.

En ningún caso podrán cortarse por falta de pago de los servicios sanitarios suministrados a hospitales públicos o en general a centros de salud pública, hogares de día, residencias geriátricas o similares de derecho público, ni a establecimientos educativos públicos de niveles inicial y medio; sin perjuicio de la obligación del Poder Ejecutivo Provincial de pagar las deudas involucradas con más sus intereses o compensar por ello al prestatario acreedor.-

CAPÍTULO 12: EXTINCIONES Y PRÓRROGAS

Artículo 92.- Autoridad Competente. Las extinciones y prórrogas de todo contrato de concesión y de toda licencia para prestar servicios de agua y/o saneamiento deberán ser resueltos por el Poder Ejecutivo, con intervención de la Agencia de Desarrollo, Regulación y Control de Servicios de Agua y Saneamiento de la provincia del Chaco (ADRYC).

Artículo 93.- Causales de extinción. La extinción de toda concesión, subconcesión o licencia, para prestar servicios de agua y/o saneamiento se extinguirá por vencimiento del plazo contractual convenido u otorgado, por rescisión, rescate, quiebra, concurso, disolución, o liquidación de la prestataria; conforme las siguientes disposiciones:

- a)** El vencimiento del plazo establecido para la prestación es automático a su término; pudiendo eventualmente operar su prórroga conforme esta Ley.
- b)** La rescisión de los contratos de concesión y de las licencias para prestar servicios de agua y/o saneamiento podrá ocurrir por culpa de la prestataria; de la autoridad concedente; o por caso fortuito de fuerza mayor.
- c)** La rescisión por culpa del prestador o prestataria reconocerá como causales las situaciones previstas en la presente Ley. La quiebra, concurso preventivo, disolución o liquidación del prestador o prestataria constituirán causales de rescisión por culpa de la misma.
- d)** Toda vez que por razones fortuita o fuerza mayor algún prestatario no pueda cumplir con obligaciones derivadas de la presente Ley, deberá comunicarlo formal y fundadamente a la Agencia de Desarrollo, Regulación y Control de

Servicios de Agua y Saneamiento, a fin de evaluar conjuntamente medidas y acciones tendientes a posibilitar el cumplimiento de la obligación en cuestión. Si no se arribare a ningún acuerdo de solución en la que se asuman equitativamente las consecuencias del caso fortuito o fuerza mayor u operare una renegociación, procederá la extinción del contrato de concesión o subconcesión que hubiere, o de la licencia pertinente.-

Artículo 94.- Extinción relativa al plan de mejoras, desarrollo y expansión.

Toda vez que la entidad prestataria no presente en tiempo, forma y contenidos su plan de mejoras, desarrollo y expansión, o las modificaciones que le sean exigidas, o bien no se avenga a convenir la instrumentación del plan aprobado por la Agencia, o convenido que fuere no dé cumplimiento a su ejecución sin causal demostrable y justificada a juicio de la misma, la ADRyC queda plenamente facultada, en articulación con la autoridad concedente, para declarar la extinción, revocación o reversión de la concesión, subconcesión o licencia preexistente para la prestación del servicio. En consecuencia operará automáticamente la rescisión por culpa de la entidad prestataria.

Artículo 95.- Prórroga. Al término del plazo de toda concesión, subconcesión o licencia podrá disponerse una prórroga por veinticuatro (24) meses desde la extinción de la concesión, subconcesión o licencia, cuando no exista un nuevo operador en condiciones de asumir la prestación del servicio. En virtud de la prórroga la entidad prestataria estará obligado a continuar con la operación del servicio en los términos establecidos en la presente ley, sus reglamentaciones y normas y actos administrativos concordantes en lo que resulte de aplicación.

Vencido el plazo de la prórroga, si no existiere un nuevo operador en condiciones de prestar el servicio, se podrá extender la prórroga por períodos iguales y consecutivos de veinticuatro (24) meses, en común acuerdo con la prestataria.

Lo establecido en este artículo se entiende sin perjuicio de la aplicación de las demás disposiciones del presente Capítulo relacionada a causales de extinción.

CAPÍTULO 13: Del RÉGIMEN CONTRAVENCIONAL Y SANCIONATORIO

Artículo 96.- Razonabilidad de las sanciones. La ADRyC podrá impulsar y aplicar sanciones guardando una razonable graduación de las mismas en función de:

- a) Acto o hecho punible;
- b) Antecedentes del infractor en cuanto a su grado de observancia del presente ordenamiento y sus reglamentaciones;
- c) Antecedentes en materia de quejas o reclamos objetivos fundados de los usuarios u otras personas físicas y/o jurídicas; y
- d) Incidencia de la conducta o infracción en relación a la prestación del servicio, a los usuarios y/o al erario público según corresponda.

Artículo 97.- Tipos de sanciones. Cada una de las violaciones o incumplimientos de la presente Ley y de sus reglamentaciones serán sancionadas por la Agencia de Desarrollo, Regulación y Control de Servicios de Agua y Saneamiento conforme los casos correspondientes con:

- a) Apercibimiento:** El apercibimiento constituye un llamado de atención dirigido al usuario o prestatario infractor, que podrá o no ser difundido en medios de comunicación social, aplicable en general ante faltas o violaciones no graves a las disposiciones de la presente Ley, normas y actos administrativos y reglamentarios concordantes que resultaren de aplicación.
- b) Multa:** Las multas son sanciones pecuniarias, aplicables a usuarios y prestatarias según corresponda, ante faltas o violaciones graves a las disposiciones de la presente Ley, normas y actos administrativos y reglamentarios concordantes que resultaren de aplicación; así como también ante la reiteración de faltas o violaciones no graves. Las conductas sancionadas con multas serán establecidas y aplicadas por la Agencia; guardando las siguientes pautas:
 - 1. Las multas serán graduadas y aplicadas contemplando los criterios generales que esta Ley establece en orden a razonabilidad de sanciones.
 - 2. El pago de las multas podrá ser requerido como pago directo del infractor o, en su caso, podrán las multas ser ejecutadas sobre las garantías que el infractor tengan constituidas en favor de la autoridad concedente y/o de la ADRyC.
 - 3. Las multas deberán ser pagadas dentro de los quince (15) días desde que la resolución que la dispuso quede firme en sede administrativa.
 - 4. Para impugnar judicialmente una multa deberá acreditarse, como requisito de procedencia de la acción, el previo pago de su monto.
 - 5. La ADRyC instrumentará los mecanismos necesarios para que los ingresos por multas reviertan a los usuarios a través de los medios que se estimen convenientes. Entre otras alternativas, y según corresponda, podrán mejorarse las capacidades e infraestructura de regulación y control; y/o disponerse rebajas en los montos de precios y tarifas, o incrementos de las metas comprometidas en los Planes de Mejoras, Desarrollo y Expansión.
- c) Suspensión del servicio:** El Poder Ejecutivo Provincial establecerá por vía reglamentaria los casos y condiciones en que los prestadores de servicios podrán suspender la prestación de éstos ante falta de pago de las tarifas aplicables o ante la verificación de la existencia de instalaciones cuyo estado afecte al servicio o signifique peligro para la salud del/os usuario/s.
- d) Inhabilitación:** La inhabilitación, en calidad de sanción, consiste en la prohibición dirigida a personas físicas y/o jurídicas, para la prestación de cualquier tipo de tarea o actividad vinculada a los servicios públicos de agua

y/o saneamiento durante un lapso determinado por la ADRyC, que no podrá exceder de los seis (6) meses.

- e) Revocación o reversión:** En casos de muy graves y reiteradas faltas, violaciones o incumplimientos de las disposiciones legales y reglamentarias regulatorias de los servicios previstos en la presente Ley, la Agencia de Desarrollo, Regulación y Control de Servicios de Agua y Saneamiento podrá aconsejar al Poder Ejecutivo Provincial la revocación o reversión de la concesión, subconcesión o licencia de las concesionarias, subconcesionarias o licenciatarias en cuestión; sin perjuicio de adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar la continuidad del servicio.
- f) Intervención Cautelar:** La ADRyC podrá disponer por sí y ante sí la intervención cautelar de la prestación del servicio sanitario cuando se den causas de extrema gravedad y urgencia que pongan en peligro la salubridad de la población, o la continuidad de la prestación; debiéndose observar las siguientes pautas:
1. La intervención cautelar podrá comprender todos los bienes y actividades de los prestadores, o podrá limitarse a un sector de sus actividades o a un establecimiento en particular, según lo que sea estrictamente necesario.
 2. La intervención cautelar podrá ser puesta en ejecución en forma inmediata a su dictado.
 3. Los recursos administrativos o judiciales que se deduzcan no suspenderán su ejecución.
 4. En caso de resistencia por parte de la prestataria, la ADRyC podrá requerir el auxilio de la fuerza pública.
 5. Para la aplicación de esta sanción no será necesario que exista, por parte del prestador intervenido, una conducta u omisión imputable ni culpable; sino que basta con que la entidad prestataria no se encuentre en condiciones de solucionar con sus medios y en forma rápida y eficaz, la situación de gravedad, urgencia, peligro o emergencia planteada.
 6. Si no hubiere existido culpa de los Prestadores en las causas que motiven la intervención, esta deberá cesar en el momento en que se consideren superadas las circunstancias que le hubieren dado origen; caso en el cual el establecimiento, la empresa, la actividad, o en general el objeto intervenido, le serán restituidos al Prestador en forma inmediata.
 7. Si hubiere existido culpa del prestador en las causas que motiven la intervención, la ADRyC requerirá a la autoridad concedente la inmediata rescisión de la concesión, subconcesión o licencia, por culpa de la prestataria. La Agencia de Desarrollo, Regulación y Control continuará por sí o terceros con la intervención, hasta tanto el servicio sea suministrado por un nuevo prestador.-
- g) Clausura:** Sin perjuicio de las demás facultades regulatorias, fiscalizadoras y sancionatorias, en protección directa e indirecta de las fuentes de agua en toda la provincia, la ADRyC podrá ordenar la clausura total o parcial de

establecimientos de cualquier tipo, rubro, fin y razón social, o si es el caso la anulación de sus vertidos de efluentes, cuando se detectare que -cualquiera fuese el medio utilizado- descargan sustancias en cualquier estado físico, potencialmente contaminantes o prohibidas, en la superficie del terreno natural, suelo, subsuelo o en profundidad, en lagunas u otros espejos de agua, en cauces permanentes, estacionales o temporarios de agua, o en paleocauces; sean que tales cuerpos receptores de los efluentes se encuentren en adyacencias, inmediaciones u otra distancia del establecimiento.

Artículo 98.- Procedimiento de aplicación. Detectada una posible infracción que pudiere dar lugar a la aplicación de una sanción, se procederá según las siguientes pautas::

- a) La Agencia notificará esta circunstancia al presunto infractor, otorgándole un plazo improrrogable de cinco (5) días para que exponga su descargo y, en su caso, ofrezca prueba.
- b) En oportunidad de presentar su descargo, el infractor podrá acreditar que la infracción ha cesado, en cuyo caso la ADRyC podrá evaluar esta circunstancia para reducir la sanción que pudiere haber correspondido.
- c) Vencido el plazo para hacer el descargo o presentado que éste fuere y producida la prueba pertinente, se resolverá sobre la presunta infracción detectada, y se aplicará la sanción que corresponda, o declarará la inexistencia de la infracción o de la responsabilidad del presunto infractor.
- d) En cualquier etapa del procedimiento, la ADRyC podrá fundadamente ordenar las medidas cautelares necesarias para paliar los perjuicios que el incumplimiento o infracción ocasione o pudiere ocasionar al suministro del servicio, a los usuarios y/o al erario público.

Artículo 99.- Condiciones de potestad sancionatoria e instancia judicial.

Los procedimientos para la aplicación de sanciones resguardarán las garantías del debido proceso y la inviolabilidad de la garantía de defensa. El ejercicio de la potestad sancionatoria de la ADRyC se regirá bajo pautas del control judicial que el dispositivo normativo de la presente Ley prevé.

Sin perjuicio de sanciones aplicables en función de esta Ley, quien las aplique podrá sustanciar la correspondiente denuncia del caso por ante el fuero penal o instancia judicial correspondiente. En particular, si las faltas o hechos importasen delitos previstos en el Código Penal, se deberá realizar las denuncias pertinentes ante el Juez competente.

CAPÍTULO 14: CONFLICTOS, CONTROVERSIAS o DIFERENDOS

Artículo 100.- Rol de la Agencia de Desarrollo, Regulación y Control. Todo conflicto, controversia o diferendo que se suscitare con motivo de la prestación

de servicios de agua y saneamiento en el territorio de la provincia del Chaco se someterá a mediación y, en su caso, decisión resolutive de la ADRyC; que a todos los efectos de la presente Ley actúa como tribunal administrativo.

Artículo 101.- Reclamos de Usuarios. Los reclamos de los Usuarios relativos a cualquier aspecto o cuestión del servicio sanitario de agua y saneamiento se gestionarán conforme el siguiente procedimiento:

- a) Los reclamos deberán deducirse directamente ante el prestador del servicio.
- b) Éste deberá resolver el reclamo en el plazo máximo de diez (10) días hábiles administrativos a partir de la fecha de presentación, salvo en casos que esta Ley o los reglamentos de la Agencia estipulen plazo específico.
- c) Si el plazo venciere sin que mediare respuesta ni solución al reclamo, el usuario podrá dar por denegado el mismo por silencio de la prestataria.
- d) Contra las decisiones o el silencio de la prestataria, el Usuario podrá interponer un recurso ante la ADRyC, dentro de los treinta (30) días corridos a partir de configurado el silencio o del rechazo expreso de su reclamo por parte del prestador.
- e) La Agencia deberá solicitar al prestatario los antecedentes del reclamo y cualquier otra información que estime necesaria al efecto, fijándole un plazo razonable de hasta a diez (10) días hábiles administrativos para responder y remitiéndole copia del recurso.
- f) En oportunidad de contestar y satisfacer la solicitud de la ADRyC el prestador del servicio podrá también exponer su opinión sobre el reclamo.
- g) Salvo que a juicio de la Agencia o pedido de cualquiera de las partes proceda mediación, la ADRyC deberá resolver el recurso interpuesto, previa sustanciación, en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos
- h) Durante sustanciación del recurso interpuesto la Agencia de Desarrollo, Regulación y Control de Servicios de Agua y Saneamiento está facultada para ordenar la suspensión cautelar -de oficio o a petición de parte- de los efectos del acto o acción de la prestataria en cuestión cuando, siendo ello susceptible de causar un daño grave al usuario, se estimare que de la suspensión no se derivaría una lesión al interés público.

Artículo 102- Pronunciamientos de la Agencia de Desarrollo, Regulación y Control. Las resoluciones de la ADRyC, que a todos los efectos de la presente Ley es como tribunal administrativo, causan estado, producen obligación de cumplimiento y agotan la vía administrativa, sin necesidad de recurso alguno; siendo de aplicación el control judicial previsto en la presente Ley.-

Artículo 103.- Arbitraje. Sin perjuicio del control judicial que la Ley prevé, todo conflicto derivado del ejercicio del poder de policía de la ADRyC y de su carácter de tribunal administrativo, que se suscitaren entre la misma y las prestatarias,

podrán ser resueltos por vía de árbitros o amigables compondores a elección en común acuerdo de las partes.-

TITULO III

DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIAS Y FINALES

CAPÍTULO 1: DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 104.- Constitución y puesta en funcionamiento. La Agencia de Desarrollo, Regulación y Control estará constituida y en funcionamiento en el término de ciento veinte (120) días desde de la sanción de esta Ley, lapso en que el Poder Ejecutivo Provincial dictará los actos procedentes a tales efectos.

Artículo 105.- Servicios vigentes. Sin perjuicio del artículo anterior, toda persona física o jurídica del derecho público o privado que a la sanción de esta Ley se encuentre prestando algún tipo de servicio de agua y/o saneamiento en el ámbito geográfico de la provincia del Chaco, sean cuales fueren las modalidades y medios utilizados para las prestaciones, gestionará ante la Provincia en un plazo de ciento ochenta (180) días calendario a partir de la sanción de la presente Ley su reconocimiento y registración en el marco de esta normativa; debiendo suministrar la documentación que acredite su condición, así como también los datos e informaciones pertinentes que le sean solicitados *ad hoc* en virtud de esta Ley; a la que se ajustarán en adelante conforme requerimientos y proceso que se acuerde expresamente con la ADRyC.

Quedan incluidas en esta obligación las prestatarias, de derecho público y privado que acreditasen contratos preexistentes de operación o prestación, y en general concesiones, subconcesiones, licencias o permisos, de hecho o de derecho, según corresponda.

El incumplimiento total o parcial del presente artículo dará lugar, de oficio, a la revisión integral de las concesiones, licencias o permisos; y, si correspondiere la reversión de las mismas.

Artículo 106.- Plan de mejoras, desarrollo y expansión. Toda persona física o jurídica que preste o suministre servicios de agua y/o saneamiento en el territorio de la provincia del Chaco, sean cuales fueren las modalidades y medios utilizados para las prestaciones, contará con un plazo de veinticuatro (24) meses, a partir de la sanción de la presente ley, para presentar a la Agencia de Desarrollo, Regulación y Control (ADRYC) el plan de mejoras, desarrollo y expansión pertinente a cada servicio que preste, a efectos de ajustarse a las disposiciones de esta normativa.

Prevía evaluación de aspectos técnicos y económico-financieros entre otros pertinentes, y de consecuentes modificaciones exigidas, la Agencia y la

prestataria convendrán la instrumentación de los planes de mejoras, desarrollo y expansión; debiéndose acordar formalmente plazos y otras estipulaciones *ad hoc* a satisfacer por la entidad prestataria para adecuarse a la norma.

Ante incumplimiento de esta disposición normativa procederá la extinción, revocación o reversión de la concesión, subconcesión o licencia preexistente.

Artículo 107.- Unidad Ejecutora Provisional. A todos los efectos del presente Capítulo y diligencias complementarias, créase la Unidad Ejecutora Provisoria, a cuya conformación y recursos proveerá el Poder Ejecutivo Provincial; la que subsistirá hasta los noventa (90) días posteriores a la constitución, integración y puesta en funcionamiento de la Agencia de Desarrollo, Regulación y Control de Servicios de Agua y Saneamiento de la Provincia del Chaco.-

CAPÍTULO 2: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

Artículo 108.- Adecuación Territorial. Las reglas, medidas y acciones de la Agencia de Desarrollo, Regulación y Control de Servicios de Agua y Saneamiento (ADRYC) considerarán en cada región los condicionamientos regionales imponen las leyes físico-naturales, las principales características socioeconómicas y ambientales del medio, los tipos y situaciones de los servicios, y las capacidades y potencialidades de los distintos prestatarios, entre otras condiciones de borde emergentes de realidades territoriales en la provincia. Las regulaciones específicas o particularizadas que eventualmente fueren necesarias para cada servicio según zona, localidad y/o paraje en virtud de sus características y/o situación especial, así como también eventuales diferendos, superposiciones, lagunas y en general contingencias emergentes, serán resueltas *ad hoc* por la ADRyC, por sí o en acuerdo con el prestador en cuestión y la autoridad provincial y municipal pertinente según correspondiere.

El ejercicio de la presente potestad de la Agencia de Desarrollo, Regulación y Control requerirá la verificación previa de la existencia de las referidas situaciones particulares, y deberá estar fundado en los estudios técnicos necesarios que justifiquen la adopción de la medida.

En todos los casos la Agencia producirá indicaciones relativas a plazos y condiciones de aplicación de las referidas pautas diferenciales

Artículo 109.- Límite físico de responsabilidad. El límite físico de responsabilidad entre el Servicio Público y la instalación interna del Usuario estará dado por:

- a) La Línea Municipal, en el caso de que el punto de medición y/o instalación de enlace se encuentre en el dominio público; o
- b) El último accesorio de empalme del servicio a la cañería de distribución interna, en el caso de instalaciones donde el punto de medición o enlace

se encuentre en dominio privado; debiendo constituirse la servidumbre de paso correspondiente a favor de la prestataria, sin cargo para ésta ni para la Provincia.-

Artículo 110.- De los instrumentos de formalización. En los correspondientes instrumentos otorgantes de la concesión, subconcesión y licencias, se establecerán convenientemente y en lo pertinente los compromisos relativos al cumplimiento de las disposiciones de esta Ley aplicables al caso; las eventuales cuentas a cobrar por cualquier concepto, causa o título, y sus montos; los pasivos que se transfieran o no, sus montos y procedimientos inherentes; y demás cláusulas de forma y contenido inherentes al instrumento específico.-

Artículo 111.- Aplicación y Perfeccionamiento. El presente dispositivo normativo provincial es válido para toda persona física y/o jurídica del derecho público o privado que tenga o adquiriera la responsabilidad ocasional, periódica o permanente de prestación de cualquier servicio de agua y/o saneamiento en el territorio provincial, así como también para la Autoridad de Aplicación y, en lo pertinente, los usuarios de tales servicios y las autoridades de facilitar los medios para su aplicación y mejoramiento.

Las situaciones no contempladas en la presente Ley, o aquellas cuyas estipulaciones ameritan perfeccionamiento, así como también la atención regulatoria y de contralor especiales ante particulares contingencias emergentes, serán resueltas *ad hoc* por la Unidad Ejecutora Provisional y posteriormente por la Agencia de Desarrollo, Regulación y Control de Agua y Saneamiento, en ambos casos por sí o en acuerdo con el prestador involucrado y la autoridad provincial y municipal pertinente.-

Las disposiciones pertinentes de la presente Ley, normas provinciales de calidad y control del agua para consumo humano y de calidad de efluentes, demás anexos y apéndices técnicos podrán ser actualizadas, ampliadas, modificadas o precisadas en sus contenidos y alcances por Resolución fundada de la Agencia de Desarrollo, Regulación y Control de Servicios de Agua y Saneamiento (ADRYC), previa intervención del Comité Técnico de Revisión y Actualización.

Artículo 112.- Delegación. Las atribuciones que esta ley otorga al Poder Ejecutivo y autoridad concedente podrán ser delegadas en lo pertinente a la Agencia de Desarrollo, Regulación y Control de Servicios de Agua y Saneamiento de la provincia del Chaco.-

CAPÍTULO 3: DISPOSICIONES FINALES

Artículo 113.- Servicio público imprescindible. A los fines de la invocación de la Ley 24.522, Art 189, declárase que todo prestatario/a o prestador/a de servicios públicos de agua y saneamiento a través de redes de tuberías (redes

de agua) o de cualquier otro medio o modalidad de suministro de servicios de agua y/o saneamiento en un todo de acuerdo a esta Ley constituyen “personas que explotan servicios públicos imprescindibles”.

Artículo 114.- Exclusión. Dado que las prestaciones de servicios de agua y saneamiento constituyen servicios públicos imprescindibles, ante la especial circunstancia y finalidad de uso del recurso hídrico superficial y/o subterráneo crudo o natural para su posterior potabilización y distribución a la comunidad usuaria, y en beneficio de la economía de los propios usuarios, todas las prestatarias de servicios públicos de agua para consumo humano en el marco de la presente Ley quedan exceptuadas del pago de cánones, tasas especiales y otros tributos relacionados con el uso del suelo y/o subsuelo; así como también relacionados a las aguas que oportunamente contemplare la Ley n° 555-R (antes Ley 3.230).-

Artículo 115.- Solvencia. En beneficio de los propios usuarios y prestadores el Poder Ejecutivo Provincia dispondrá las estrategias, medidas y acciones necesarias y los recursos suficientes, con el objeto de otorgar sustentabilidad a la Agencia de Desarrollo, Regulación y Control de Agua y Saneamiento como autoridad de aplicación de la presente Ley, para el pleno desarrollo y modernización continua de capacidades de gestión que le permitan concretar con solvencia los fines para los que se crea.

Artículo 116.- Fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad provinciales darán el apoyo necesario y suficiente a la Agencia de Desarrollo, Regulación y Control de Servicios de Agua y Saneamiento de la Provincia del Chaco, toda vez que por sus autoridades le fuere solicitado.

Artículo 117.- Facultades especiales del Poder Ejecutivo Provincial. Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial para dictar todos los actos necesarios y suficientes a fin de llevar a cabo el proceso de fortalecimiento de capacidades institucionales para para la elaboración e instrumentación de planes de mejoras, desarrollo y expansión de servicios de agua y saneamiento, para la regulación y control eficaces de prestaciones sanitarias, así como también para el estudio y definición de indicadores de calidad del recurso hídrico en todo el territorio de la provincia del Chaco.-

Artículo 118- Impuestos y tasas. Exímese de todos los impuestos y tasas provinciales, y los multilaterales que involucren a la Provincia del Chaco, a todos los actos de la Unidad Ejecutora Provisional, así como también los de la Agencia de Desarrollo, Regulación y Control de Servicios de Agua y Saneamiento de la provincia del Chaco.-

Artículo 119.- Adaptación presupuestaria. Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para habilitar las partidas con que se atenderán los gastos que genere la aplicación de la presente Ley, dentro de los topes que fije la Ley de Presupuesto.

Artículo 120.- Derogación. Deróganse a partir de la sanción de esta Ley los artículos n° 126 y n° 130 de la Ley n° 555-R (antes Ley 3.230); y toda otra disposición normativa que se oponga a la presente o regule las mismas materias en forma distinta. Todo conflicto normativo relativo a su aplicación se resolverá en beneficio de esta Ley.

Artículo 121.- Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación.-

Artículo 122.- (De forma).-
.....

ANEXOS

- A.** Significado de Conceptos Aplicables.
- B.** Atributos indicativos de Calidad de Servicios.
- C.** Normas Provinciales de Calidad y Control del Agua para Consumo Humano.

Apéndices

- I: Acerca de valores de referencia y las normas provinciales.
- II: Parámetros incluidos.
- III: Laboratorios.
- D.** Normas Provinciales de referencia de Calidad de Efluentes.
- E.** Régimen Tarifario.